

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP)

Informe Nacional Venezuela

Sergio Lacambra
Gines Suarez
Tsuneki Hori
Rolando Duran
Ana Maria Torres
Virginia Jiménez
Ernesto Visconti

División de Medio Ambiente
Desarrollo Rural y Gestión
del Riesgo de Desastres

NOTA TÉCNICA N°
IDB-TN-1447

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP)

Informe Nacional Venezuela

Sergio Lacambra
Gines Suarez
Tsuneki Hori
Rolando Duran
Ana Maria Torres
Virginia Jiménez
Ernesto Visconti

Septiembre 2016

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres
(iGOPP): informe nacional Venezuela / Sergio Lacambra, Ginés Suárez, Tsuneki Hori,
Rolando Duran

Ana Maria Torres, Virginia Jiménez, Ernesto Visconti.

p. cm. — (Nota técnica del BID ; 1447)

1. Natural disasters-Government policy-Venezuela. 2. Emergency management
Government
policy-Venezuela. 3. Environmental risk assessment-Government policy Venezuela.
I. Lacambra, Sergio. II. Suárez, Ginés. III. Tsuneki, Hori. IV. Duran, Rolando.
V. Torres, Ana María VI. Jiménez. Virginia. VII. Visconti, Ernesto.
VIII. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. IX. Serie.
IDB-TN-1447

Palabras clave: desastres naturales; gestión del riesgo; gobernabilidad; América Latina

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2016 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Sergio Lacambra: slacambra@iadb.org

Este documento fue preparado por:

Los especialistas del BID en Gestión del Riesgo: Sergio Lacambra (Jefe de Equipo), Ginés Suarez y Tsuneki Hori.

Los consultores externos en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático: Rolando Duran, Ana Maria Torres y Virginia Jimenez. La revisión de indicadores desde el punto de vista legal fue realizada por el abogado especializado en marcos legales para la Gestión del Riesgo: Ernesto Visconti.

También se contó con la colaboración del Gobierno de Venezuela.

El desarrollo y publicación de este documento fue financiado por medio de la Cooperación Técnica Regional RG-T2064, financiada por el Fondo Multidonante de Prevención de Desastres con contribuciones de Canadá, España, Japón y Corea.

Tabla de Contenidos

| | |
|---|-----------|
| Resumen Ejecutivo | 3 |
| 1. Introducción..... | 10 |
| 2. Marco Institucional | 16 |
| 3. Resultados de la Aplicación | 20 |
| a. Marco General de gobernabilidad para la GRD..... | 23 |
| b. Identificación y conocimiento del Riesgo..... | 27 |
| c.Reducción del Riesgo..... | 31 |
| d.Preparativos de Respuesta..... | 36 |
| e.Planificación de la recuperación post-desastre..... | 42 |
| f. Protección Financiera..... | 45 |
| 4. Conclusiones | 52 |
| 5. Recomendaciones de Reforma Política | 54 |
| Anexo 1: Listado de Indicadores | 63 |

Tabla de Gráficos

| | |
|---|----|
| Gráfico 1. Componentes de Reforma de Política Pública en GRD según el iGOPP..... | 6 |
| Gráfico 2. Fases de la Política Pública según el iGOPP..... | 7 |
| Gráfico 3. Componentes de Reforma de Política Pública en GRD según el iGOPP | 21 |
| Gráfico 4. Fases de Política Pública según el iGOPP | 22 |
| Gráfico 5. Marco General de Gobernabilidad para la GRD por Fases de la Política Pública | 27 |
| Gráfico 6. Identificación del Riesgo por fases de la Política Pública..... | 31 |
| Gráfico 7. Reducción del Riesgo por Fases de la Política Pública | 36 |
| Gráfico 8. Preparación para la Respuesta por Fases de la Política Pública | 42 |
| Gráfico 9. Planificación de la Recuperación por Fases de la Política Pública..... | 45 |
| Gráfico 10. Protección Financiera por Fases de la Política Pública..... | 51 |

Tabla de Cuadros

| | |
|---|----|
| Cuadro 1. Clasificación y Codificación del iGOPP..... | 14 |
| Cuadro 2. Componentes de Reforma de Política Pública en GRD según el iGOPP | 21 |
| Cuadro 3. Fases de la Política Pública según el iGOPP | 22 |
| Cuadro 4. Marco general de gobernabilidad para la GRD por fases de la política pública .. | 27 |
| Cuadro 5. Identificación del Riesgo por fases de la política pública | 30 |
| Cuadro 6. Reducción del riesgo por fases de la política pública..... | 35 |
| Cuadro 7. Preparación para la respuesta por Fases de la política pública | 41 |
| Cuadro 8. Planificación de la recuperación por fases de la política pública..... | 45 |
| Cuadro 9. Protección financiera por fases de la política pública..... | 51 |

Resumen ejecutivo

La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 156, prevé la administración de riesgos y emergencias como competencias del Poder Público Nacional. Este mandato se concreta a través de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos promulgada en 2009 y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, aprobada en 2001.

Desde hace varios años, en Venezuela se viene desarrollando un proceso multidisciplinario y multisectorial para incorporar la gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo económico y social. En dicho proceso se ha previsto la participación de todos los ministerios, además de empresas vinculadas con sectores específicos, como el sector del agua (HIDROVEN) y del sector petrolero (PDVSA), así como otros organismos e instituciones académicas, como el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y las principales universidades del país.

En 2013 el Gobierno Venezolano creó el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual articula tres ámbitos: gestión de emergencias, gestión de desastres y gestión de riesgo, cuyos ejes de acción se sustentan, en gran medida, en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos, de 2009.

Esta norma establece el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos, como la instancia interministerial de más alto nivel político, responsable de la coordinación y articulación de la política nacional en la materia. Sin embargo, esta entidad no ha logrado mantenerse funcional, de la forma que está prevista en la Ley.

De igual forma, la normatividad establece el Comité Coordinador Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, el cual está conformado por todos los despachos del Ejecutivo Nacional y que agrupa a todos los sectores y niveles de gobierno, con la participación de la representación de los Gobernadores de Estado, alcaldes y organizaciones no gubernamentales, así como la Coordinación Nacional de Bomberos y organismos de administración de emergencias de carácter civil. En el seno del Comité Coordinador Nacional se prevé además la constitución de subcomités técnicos sectoriales y equipos de trabajo especializados para acciones y medidas en materia de protección civil y administración de

desastres. Esta estructura es responsable de las acciones de preparación y respuesta ante desastres.

El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) ha sido diseñado para evaluar la existencia formal, y por ende comprobable, de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un país determinado. Es un indicador compuesto o sintético que permite verificar si en un determinado país se dan las condiciones de gobernabilidad adecuadas para poder implementar una política pública para la gestión integral del riesgo de desastres.

La metodología del iGOPP reconoce el cumplimiento de indicadores cuando hay verificables claros y explícitos de la condición que se quiere medir, y su diseño se fundamenta en dos pilares conceptuales:

1. El marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus principales procesos
2. El marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública

En el marco conceptual del iGOPP la GRD se aborda como el conjunto de procesos orientados a adoptar e implementar políticas, estrategias y prácticas para reducir los riesgos y sus potenciales efectos, y se analiza en base a **seis componentes** que son necesarios para su implementación efectiva. Los componentes son:

1. **Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG):** Se refiere a la existencia de una base normativa adecuada para la organización y coordinación de la GRD en cada país.
2. **Identificación y conocimiento del riesgo (IR):** Se enfoca en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos.
3. **Reducción del riesgo (RR):** Se enfoca en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.
4. **Preparativos para la respuesta (PR):** Su objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre.

5. **Planificación de la recuperación post-desastre (RC):** se focaliza en la preparación ex-ante para el rápido y adecuado restablecimiento de condiciones de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios, así como la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre.
6. **Protección financiera (PF):** busca la combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo para poder acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos.

En el iGOPP, cada componente se subdivide en preguntas relativas a las **tres fases** de gobernabilidad de la política pública:

- A. **Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política:** El iGOPP analiza esta inclusión en la agenda y formulación de la política pública a tres niveles: (i) Coordinación y articulación central de la política; (ii) Definición de responsabilidades sectoriales; y (iii) Definición de responsabilidades territoriales.
- B. **Implementación de la política:** El iGOPP analiza las evidencias de implementación a través de la verificación de acciones ejecutadas o de la disponibilidad de recursos asignados a los actores responsables de implementar la política de GRD, en sus distintos componentes y niveles de gobierno.
- C. **Evaluación de la política:** El iGOPP analiza la evaluación de la política pública desde la perspectiva de la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, por un parte, y de información y participación ciudadana, por otra parte.

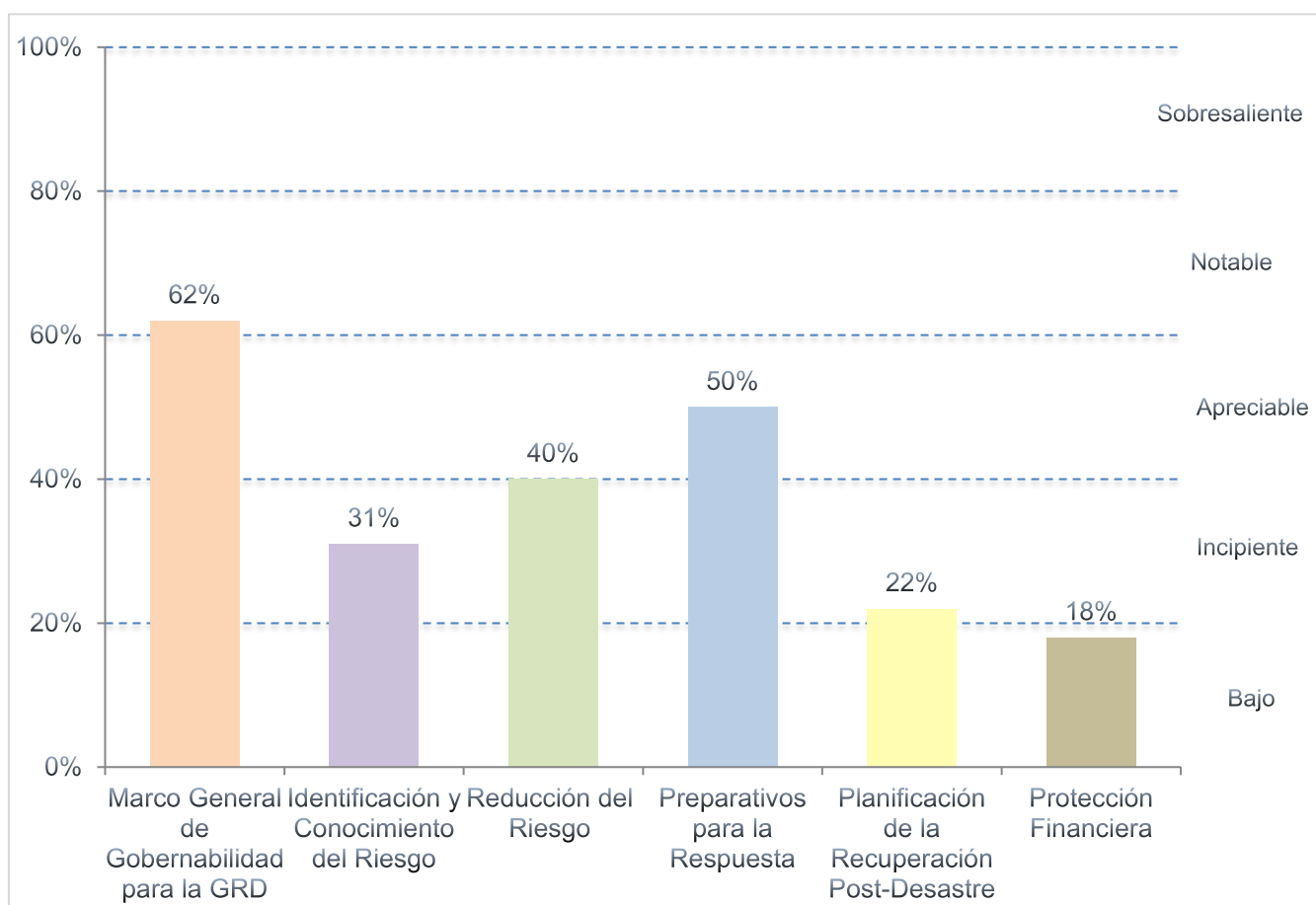
Los resultados de la aplicación del iGOPP en Venezuela (junio 2015 – noviembre 2015) demuestran un **nivel general de cumplimiento de indicadores del 37,09%**, considerado dentro del rango “incipiente” en la clasificación propuesta por este índice.

El componente de la GRD con el puntaje más alto en Venezuela es el “Marco General de Gobernabilidad en GRD” con el 62% de cumplimiento, lo cual lo ubica en el rango “apreciable”. También en el rango “apreciable” se encuentra el componente de “Preparativos para la respuesta”, con un 50% de indicadores cumplidos. En el rango “incipiente” se encuentran los componentes “Reducción del riesgo” con un 40% de cumplimiento, “Identificación y conocimiento del riesgo” con un 31% de cumplimiento y “Planificación de la recuperación post-desastre” con un 22%. Por su parte, el único componente que se encuentra en el rango

“bajo” es el de “Protección financiera” (18%). Los componentes de cumplimiento apreciable se encuentran respaldados fundamentalmente por la existencia de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos de 2009 y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de 2001.

En los cuadros y gráficos siguientes se puede observar los niveles generales de cumplimiento de los indicadores del iGOPP:

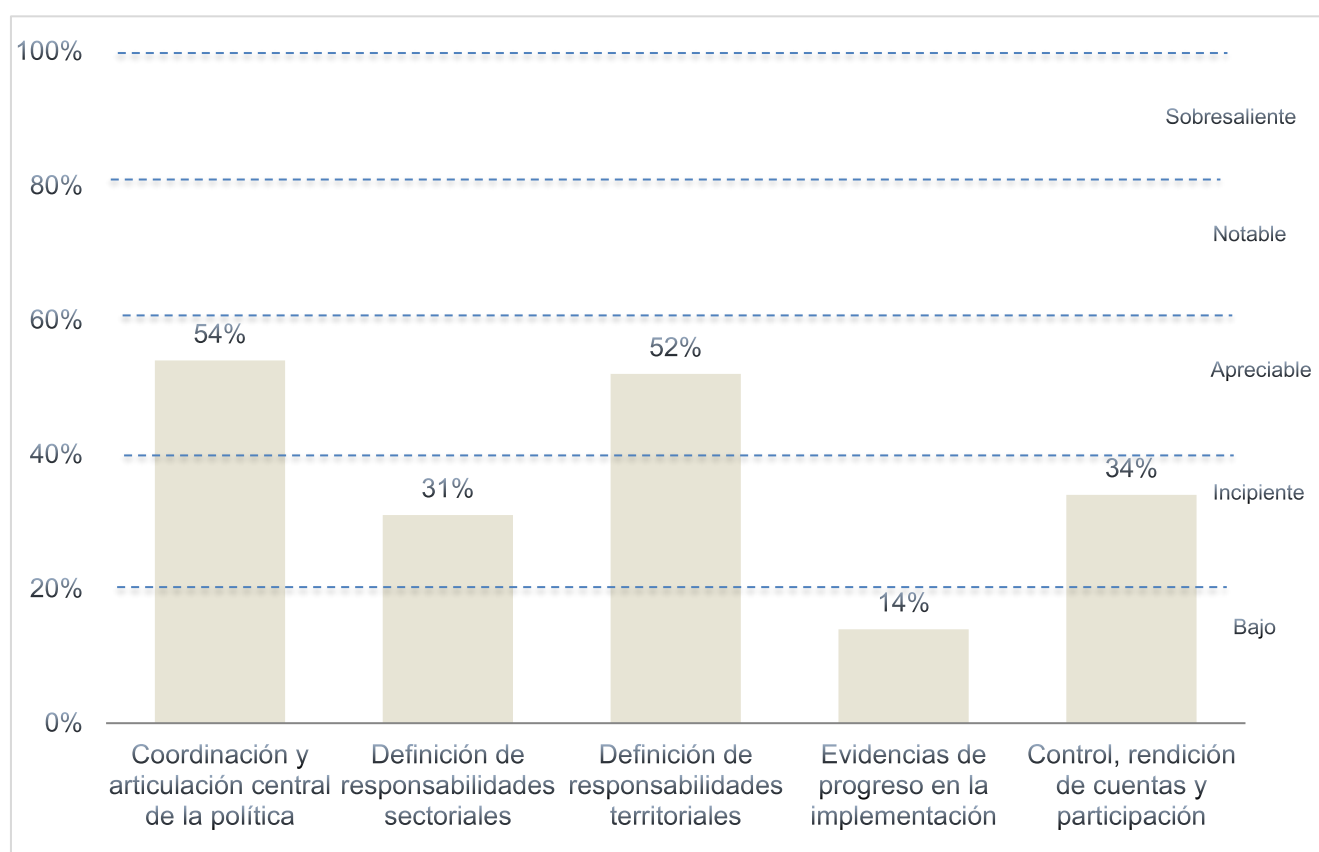
Gráfico 1: Componentes de reforma en política pública en GRD según el iGOPP.
Venezuela (noviembre 2015)



El análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra un avance “apreciable” para las fases de “Coordinación y articulación central de la política” (54%) y de “Definición de responsabilidades territoriales” (52%). Las fases de “Control, rendición de cuentas y participación” (34%) y “Definición de responsabilidades sectoriales” (31%) se encuentran en el rango “incipiente”.

En el rango “bajo” se ubica la fase de “Evidencias de progreso en la implementación” (14%). Este nivel tan bajo de cumplimiento de indicadores podría indicar un desfase considerable entre lo que está estipulado en la normatividad – donde se aprecia un cumplimiento “apreciable” del “Marco General de Gobernabilidad en GRD”, con un 62% – y lo que se está aplicando en realidad.

**Gráfico 2: Fases de la política pública en GRD según el iGOPP.
Venezuela (noviembre 2015)**



Conclusiones

1. Venezuela actualizó su normativa sobre gestión de riesgo en el año 2009. Por esta razón una cantidad importante de indicadores relacionados con la fase de “Coordinación y articulación central de la política” se cumplen. Complementario a esto, Venezuela es el único país de la región que cuenta con una ley específica para los procesos de preparación y respuesta. Este es un caso interesante de observar ya que, en lugar de derogar la ley que cubre los procesos reactivos, el país optó por legislar

de forma complementaria los aspectos prospectivos y correctivos y crear una instancia de coordinación de todos los procesos incluidos en ambas normativas.

2. La aplicación del índice muestra como el componente del “Marco General de Gobernabilidad en GRD” es el de mayor cumplimiento de indicadores, con un 62%. Le siguen los “Preparativos para la respuesta” con un 57%. Esto podría mostrar la existencia de una importante base normativa de carácter general, que aún no ha sido complementada con la adopción o implementación de normativa sectorial.
3. La fase de política pública con mayor nivel de cumplimiento a lo largo de los cinco componentes es la “Coordinación y articulación central de la política”, la cual alcanza un 54% de los indicadores. Aún en los componentes de más bajo cumplimiento de indicadores, esta fase se destaca con un alcance relativamente mayor: 50% en el componente de Protección Financiera y 38% en el componente de Planificación de la recuperación post-desastre.
4. El componente con menor cumplimiento de indicadores es el de “Protección financiera” con un 18%, lo que indica existen pocos mecanismos instalados para una adecuada retención y transferencia del riesgo de desastres, lo que provocaría que, ante la inminencia de una emergencia y posterior ocurrencia de un desastre, las estructuras institucionales tendrían una disminuida capacidad de respuesta debido a limitaciones en el acceso oportuno a recursos. Por esta razón, la protección financiera se constituye en una de las principales prioridades para los procesos de reforma de la normativa que se puedan emprender.
5. Al igual que en los demás países de la región el componente de “planificación de la recuperación post-desastre”, tiene un nivel de cumplimiento muy bajo, con un 22% de los indicadores cumplidos. El enfoque más complejo de recuperación, que se viene desarrollando en el marco conceptual y estratégico de la gestión de riesgo, no se encuentra presente aún en la normatividad venezolana. Destaca el hecho de que no se cumple ninguno de los indicadores relacionados con responsabilidades sectoriales y territoriales, así como de evidencias de progreso en la implementación.
6. Una fortaleza que se identifica en la normatividad venezolana en la existencia de muchas condiciones positivas en el ámbito de la descentralización y la definición de responsabilidades territoriales. En general, esta fase alcanza un 52% de cumplimiento en los diferentes componentes. Tres componentes alcanzan niveles “Sobresaliente” y

“Notable”: el Marco General, con un 100%; Preparativos de la Respuesta, con un 100%; y Reducción de Riesgo, con un 80%.

7. Contrario a lo anterior, la “Definición de responsabilidades sectoriales” tiene niveles menores de cumplimiento, con un 31% dentro de todos los componentes. En este sentido se puede observar que Venezuela es un país con una “normatividad expresa”, o un marco normativo específico de la gestión de riesgo mucho más desarrollado que a nivel de la normatividad de los sectores que componen su estructura de implementación.
8. La fase de menor cumplimiento es “Evidencias del progreso en la implementación”, con únicamente un 14% de indicadores. Este indicador puede estar marcando un importante vacío entre la definición de las normas y su implementación en la práctica. También, se explica por la ausencia de instrumentos presupuestales que permitan evidenciar la asignación de recursos a los diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres.
9. Ninguno de los componentes de la GRD o fases de política pública alcanza los rangos “Notable” o “Sobresaliente”. Esto muestra unas condiciones generales heterogéneas, dentro de los componentes.

1. Introducción

El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) ha sido diseñado para evaluar la existencia formal, y por ende comprobable, de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un país determinado.

El iGOPP no reemplaza o sustituye otros indicadores relacionados con el tema, por el contrario, complementa las diferentes metodologías existentes para la evaluación holística del riesgo y de la gestión del riesgo de desastres.

La utilidad práctica del iGOPP consiste en establecer los vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir en un país determinado y ayuda a focalizar los esfuerzos del BID y del propio país en los aspectos relevantes de reforma de la gobernabilidad encaminados en mejorar las opciones de política pública de gestión del riesgo de desastres en los países de América Latina y El Caribe.

El iGOPP es un indicador compuesto o sintético que permite verificar si en un determinado país se dan las condiciones de gobernabilidad adecuadas para poder implementar una política pública para la gestión integral del riesgo de desastres. En ese sentido, permite cuantificar en qué medida las acciones, políticas y reformas del gobierno y sus instituciones son consecuentes con los objetivos, resultados y procesos de la gestión del riesgo de desastres.

La metodología del iGOPP reconoce el cumplimiento de indicadores cuando hay verificables claros y explícitos de la condición que se quiere medir. Por otro lado, dicha metodología da por incumplidos aquellos indicadores que pretendan ser sustentados por verificables en los que se “intuye” el cumplimiento. Es decir, el iGOPP prioriza el cumplimiento explícito, y no el “intuitivo”.

El diseño del iGOPP se fundamenta en dos pilares conceptuales:

3. El marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus principales procesos
4. El marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública

La **Gestión del Riesgo de Desastres** (GRD) se refiere a todos los procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos de desastre, fomentar la reducción y la transferencia de riesgos de desastre, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para

los casos de desastre, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible. Incluye las gestiones prospectivas, correctiva y reactiva del riesgo.

La GRD se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad y la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos, y por lo tanto está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno.

En el marco conceptual del iGOPP la GRD se aborda como el conjunto de procesos orientados a adoptar e implementar políticas, estrategias y prácticas para reducir los riesgos y sus potenciales efectos, y se analiza en base a seis componentes que son necesarios para su implementación efectiva. La selección de estos componentes se basa en la experiencia de los procesos de reforma política desarrollados por el Banco:

1. **Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG):** Se refiere a la existencia de una base normativa adecuada para la organización y coordinación de la GRD en cada país, la cual incluye tanto la normativa específica en GRD como las normas habilitadoras territoriales y sectoriales que garanticen su viabilidad. Así mismo la disponibilidad de recursos para la implementación de los procesos de la GRD, y el establecimiento de mecanismos adecuados de información y participación ciudadana, y de monitoreo, evaluación y seguimiento de dichos procesos.
2. **Identificación y conocimiento del riesgo (IR):** Es el proceso de la GRD enfocado en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos. Este proceso incluye el análisis anticipado de las consecuencias y admite tanto interpretaciones objetivas y científicas como de percepción social e individual. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el desarrollo continuo del análisis de riesgos, herramienta que permite la identificación y evaluación de los probables daños y pérdidas ocasionadas por eventos naturales.
3. **Reducción del riesgo (RR):** Proceso de la GRD enfocado en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del

desarrollo sostenible. Este proceso comprende las intervenciones prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, y para su implementación adecuada requiere contar con una buena base de información sobre las condiciones de riesgo. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la intervención oportuna y adecuada de las causas que generan las condiciones de vulnerabilidad actual.

4. **Preparativos para la respuesta (PR):** Es el proceso de la GRD cuyo objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, permitiendo normalizar las actividades esenciales en la zona afectada por el desastre. La preparación se lleva a cabo mediante el monitoreo de eventos y la definición de escenarios de riesgo, la planificación, organización, entrenamiento, dotación de recursos y simulación para las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro, y asistencia humanitaria que deben realizarse en caso de emergencia. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para una rápida y adecuada respuesta ante la ocurrencia o inminencia de una situación de emergencia.
5. **Planificación de la recuperación post-desastre (RC):** Proceso ex ante que se focaliza en la preparación para el rápido y adecuado restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para un restablecimiento de medios de vida, de servicios básicos e infraestructura de forma tal que se reduzca la improvisación, la ineficiencia y la ineficacia en los procesos de recuperación post-desastre.
6. **Protección financiera (PF):** Es el proceso de la GRD que busca la combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo para poder acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el

balance fiscal del Estado¹. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el diseño e implementación de una estructura adecuada de retención y de transferencia del riesgo de desastres.

Por otro lado, la **Gobernabilidad** se refiere a la capacidad de gobierno de un problema público. Esta capacidad se manifiesta en la gestión continuada y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones, pero también de los actores sectoriales y privados de un país. En la medida que se incrementa la capacidad de gobierno del problema debería observarse una mayor efectividad de las decisiones adoptadas y de las políticas implementadas con el resultado de evitar un mayor número de consecuencias negativas en el caso de los desastres.

En el marco conceptual del iGOPP, la Gobernabilidad se aborda desde la perspectiva de las fases del proceso de políticas públicas, que incluyen las siguientes:

A. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política

La inclusión en la agenda responde en buena medida al grado de madurez del problema público y al nivel de presión política y social que reciben las instituciones. Para que el liderazgo político y la presión social y económica den lugar a la acción sustantiva puede ser necesario que el nivel político avance significativamente en la línea de definir las responsabilidades de los distintos actores involucrados en el proceso de análisis. El iGOPP analiza la inclusión en la agenda a través de la verificación de la existencia de marcos legales apropiados para la GRD, o de la inclusión del tema en normas sectoriales y territoriales. El iGOPP analiza esta inclusión en la agenda y formulación de la política pública a tres niveles: (i) Coordinación y articulación central de la política; (ii) Definición de responsabilidades sectoriales; y (iii) Definición de responsabilidades territoriales.

¹ Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010

B. Implementación de la política

El iGOPP analiza las evidencias de implementación a través de la verificación de acciones ejecutadas o de la disponibilidad de recursos asignados a los actores responsables de implementar la política de GRD, en sus distintos componentes y niveles de gobierno.

C. Evaluación de la política

El iGOPP analiza la evaluación de la política pública desde la perspectiva de la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, por un parte, y de información y participación ciudadana, por otra parte.

Ambas dimensiones (GRD y Gobernabilidad/Política Pública) se evidencian en la estructura matricial del iGOPP, definida por cinco columnas que analizan las fases de la política pública, y seis filas que analizan los componentes de los procesos de reforma de política pública en GRD. Esta estructura matricial se expresa en 30 celdas, que integran un número variable de indicadores binarios.

El puntaje del índice va de 0 a 100 y se establece el siguiente sistema de clasificación:

Cuadro 1. Clasificación y Codificación del iGOPP

| Porcentaje | Valoración |
|-------------------|-------------------|
| 91 - 100% | Sobresaliente |
| 71 - 90% | Notable |
| 41 - 70% | Apreciable |
| 21 - 40% | Incipiente |
| 0 - 20% | Bajo |

Tabla 1: Clasificación y codificación del iGOPP

| Fases de Política Pública Componentes de reforma de política pública en GRD | 1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política | | | 2. Implementación de la política | 3. Evaluación de la política: |
|--|---|---|---|---|---|
| | Coordinación y articulación central de la política | Definición de responsabilidades sectoriales | Definición de responsabilidades territoriales | Evidencias de progreso en la implementación | Control, rendición de cuentas y participación |
| Marco general de la GRD (MG) | MG-1A | MG-1B | MG-1C | MG-2 | MG-3 |
| Identificación del riesgo (IR) | IR-1A | IR-1B | IR-1C | IR-2 | IR-3 |
| Reducción del riesgo (RR) | RR-1A | RR-1B | RR-1C | RR-2 | RR-3 |
| Preparación de la respuesta (PR) | PR-1A | PR-1B | PR-1C | PR-2 | PR-3 |
| Planificación de la recuperación post-desastre (RC) | RC-1A | RC-1B | RC-1C | RC-2 | RC-3 |
| Protección financiera (PF) | PF-1A | PF-1B | PF-1C | PF-2 | PF-3 |

2. Marco Institucional:

Venezuela es un país vulnerable a distintos fenómenos naturales tales como sismos, inundaciones, movimientos en masa, tormentas tropicales y huracanes, tsunamis, y eventos tecnológicos tales como incendios, explosiones, derrames y otros. El registro de eventos históricos refleja que la mayor incidencia e impactos se dan como resultado de las amenazas desencadenadas por lluvias sobre las poblaciones vulnerables del país. Un 71% de los eventos ocurridos corresponden a inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos y movimientos en masa, según los registros de las bases de datos disponibles (www.estudiosydesastres.gob.ve y www.desinventar.org).

El país cuenta con tres niveles de gobierno y está dividida político-territorialmente en un Distrito Capital, 23 estados, y éstos a su vez en 335 municipios. Su capital, Caracas, está conformada por cinco municipios: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, que agrupan un total cercano a 5 millones de habitantes.

Los avances más importantes en materia de gestión del riesgo de desastres han ocurrido precisamente luego de grandes catástrofes, tales como el sismo de Caracas de 1967, el accidente de la planta termoeléctrica de Tocoa en 1982, la crecida del Río el Limón en 1986, el paso de la Tormenta Tropical “Bret” en 1993, el sismo de Cariaco en 1997, el desastre de Vargas de 1999, y las lluvias intensas que afectaron gran parte del país en 2005 y en 2010-2011. Otros eventos han tenido lugar más recientemente, como el de la localidad de Guasdalito del Estado Apure, con más de 40.000 damnificados en 2015.

Reconociendo los esfuerzos que se han dado con anterioridad en el tema, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dio un importante paso en la incorporación de la Gestión de Riesgos en sus artículos 55, 332 y 128, donde se menciona de manera explícita la *Seguridad Ciudadana* como un derecho fundamental del ciudadano a ser protegido “...frente a cualquier amenaza, vulnerabilidad o riesgo” (art. 55). La actual Constitución en su artículo 156, prevé la administración de riesgos y emergencias como competencias del Poder Público Nacional. Este mandato se concreta a través de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos promulgada en 2009 y que propone un enfoque transversalizado en las estructuras del Estado, y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, aprobada en 2001, luego de los aludes torrenciales que impactaron el Estado de Vargas.

En 2005 y tras un periodo de lluvias que afectó el occidente del país, se creó la Comisión Presidencial para la Gestión de Riesgos, instancia que al más alto nivel llamó la atención del

estado en la construcción de los escenarios de riesgos. Diversas reuniones sectoriales y esfuerzos consolidaron junto a la Asamblea Nacional, la mencionada Ley de Gestión de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos de 2009.

Esta ley establece el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos, como la instancia interministerial de más alto nivel político, responsable de la coordinación y articulación de la política nacional en la materia, y La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos, como la instancia que debe coordinar y hacer seguimiento a las decisiones y acciones que se tomen en la materia según la ley. Esta última instancia aún no ha sido conformada.

Por otra parte, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de 2001 establece el Comité Coordinador Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, el cual está conformado por todos los despachos del Ejecutivo Nacional y que agrupa a todos los sectores y niveles de gobierno, con la participación de la representación de los Gobernadores de Estado, Alcaldes y organizaciones no gubernamentales, así como la Coordinación Nacional de Bomberos y organismos de administración de emergencias de carácter civil. En el seno del Comité Coordinador Nacional se prevé además la constitución de subcomités técnicos sectoriales y equipos de trabajo especializados para acciones y medidas en materia de protección civil y administración de desastres. Esta estructura es responsable de las acciones de preparación y respuesta ante desastres.

En 2013 el Gobierno creó el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la finalidad de instrumentar la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos promulgada en 2009. Este Viceministerio, articula tres ámbitos: La Gestión de Emergencias a través de la Coordinación Nacional de Bomberos; la Gestión de Desastres a través de la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres; y la Gestión de Riesgo, a través de la Dirección General de Gestión de Riesgos. Desde hace varios años se viene desarrollando un proceso multidisciplinario y multisectorial para incorporar la gestión de riesgos de desastres en la planificación del desarrollo económico y social. En dicho proceso se ha previsto la participación de todos los ministerios, además de empresas vinculadas con sectores específicos, como el sector del agua (HIDROVEN) y del sector petrolero (PDVSA), así como otros organismos e instituciones académicas, como el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) y las principales universidades del país.

Una característica notable de la legislación venezolana en materia de GRD es la existencia de las dos leyes complementarias, antes mencionadas: La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos fue promulgada en 2009 con la visión de abordar los aspectos prospectivos y correctivos del riesgo (Reducción del Riesgo) que no están cubiertos en la Ley de la Organización de Protección Civil adoptada en 2001 y cuyo foco son los preparativos y la respuesta. De tal manera, ambas leyes son complementarias. La estructura de coordinación, bajo el Viceministerio para la Gestión del Riesgo y Protección Civil, incluye y articula todos los elementos previstos en ambas leyes de manera operativa. Eventualmente la Secretaria Técnica sería la instancia articuladora de los mandatos establecidos en ambas leyes.

Es importante mencionar que la ley de 2009 deroga todos aquellos elementos jurídicos previos que se le opongan, con lo cual no existe posibilidad de duplicación o solapamiento de la normativa.

Los diferentes ámbitos de acción, antes mencionados, se muestran en el siguiente organigrama:

Nivel superior

Junta ministerial

Despacho del ministro

Comisión proyectos especiales

Nivel de asesoría y apoyo

Dirección del Despacho

Oficina de Consultoría Jurídica

Oficina de Gestión Financiera

Oficina de Tecnologías de la Información

Oficina de Auditoría Interna

Oficina de Seguridad Integral

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

Oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía

Oficina de Relaciones Internacionales

Nivel sustantivo

Despacho del Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica

Direcc. Gral. del Ceremonial y Acervo Histórico

Direcc. Gral. de Asuntos Políticos y Sociales

Direcc. Gral. de Justicia Instituciones Religiosas y Culto

Direcc. Gral. de Derechos Humanos

Despacho del Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana

Direcc. Gral. de Prevención del Delito

Direcc. Gral. de Coord. de Seguridad Ciudadana

Direcc. Gral. de Centros de Seguridad y Atención de Emergencias

Direcc. Gral. de Bomberos y Adm. Emergencias de Carácter Civil

Direcc. Gral. de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada

Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Policía

Dirección General del Servicio de Policía

Dirección General de Asistencia Técnica

Dirección General de Supervisión Disciplinaria de los Cuerpos de Policía

Despacho del Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal

Dirección General del Diseño Estratégico

Dirección General de Control Operacional

Dirección General de Gestión y Documentación Penal

Despacho del Viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil

Dirección General de Gestión del Riesgo

Dirección General de Coordinación Nacional de Bomberos y Administración de Emergencia de Carácter Civil

Nivel desconcentrado funcional

Servicio Autónomo de Registros y Notarías

Servicio Adm. de Identificación, Migración y Extranjería

Brigada especial contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia

Fondo Nacional Antidrogas

Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana

Comisión Nacional de Casinos, Salas de bingo y máquina tragapapeles

Oficina Nacional Antidrogas

Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía

Servicio Nacional de Adm. y Enajenación de bienes asegurados, incautados, confiscados y decomisados

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

Servicio Nacional para el Desarme

Fondo Nac. de Bomberos y Adm. de Emergencias de carácter civil

Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres

Dirección Nac. de Protección Civil y Adm. de Desastres

Nivel descentralizado

Fundación Misión Identidad

Fundación Fondo Administrativo de Salud para MPPRIJP sus Organos y Entes Adscritos

Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana

Instituto Nacional de Transporte Terrestre

Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento y Consumo de Drogas

Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad

Instituto de Prevención Social para el Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

Instituto Nacional contra la Discriminación Racial

3. Resultados de la aplicación

Los resultados de la aplicación del iGOPP en Venezuela (junio 2015 – noviembre 2015) demuestran un nivel general de avance del 37,09%, considerado dentro del rango “incipiente” en la clasificación propuesta por este índice.

El componente de la GRD con el puntaje más alto en Venezuela es el “Marco General de Gobernabilidad para la GRD” con el 62% de cumplimiento, lo cual lo ubica en el rango “apreciable”. También en el rango “apreciable” se encuentra el componente de “Preparativos para la respuesta”, con un 50% de indicadores cumplidos. En el rango “incipiente” se encuentran los componentes “Reducción del riesgo” con un 40% de cumplimiento, “Identificación y conocimiento del riesgo” con un 31% de cumplimiento y “Planificación de la Recuperación post-desastre” con un 22%. Por su parte, el único componente que se encuentra en el rango “bajo” es el de “Protección financiera” (18%). Los componentes de cumplimiento apreciable se encuentran respaldados fundamentalmente por la existencia de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos de 2009 y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de 2001.

El análisis general desde la dimensión de las fases de la política pública muestra un avance “apreciable” para las fases de “Coordinación y articulación central de la política” (54%) y de “Definición de responsabilidades territoriales” (52%). Las fases de “Control, rendición de cuentas y participación” (34%) y “Definición de responsabilidades sectoriales” (31%) se encuentran en el rango “incipiente”.

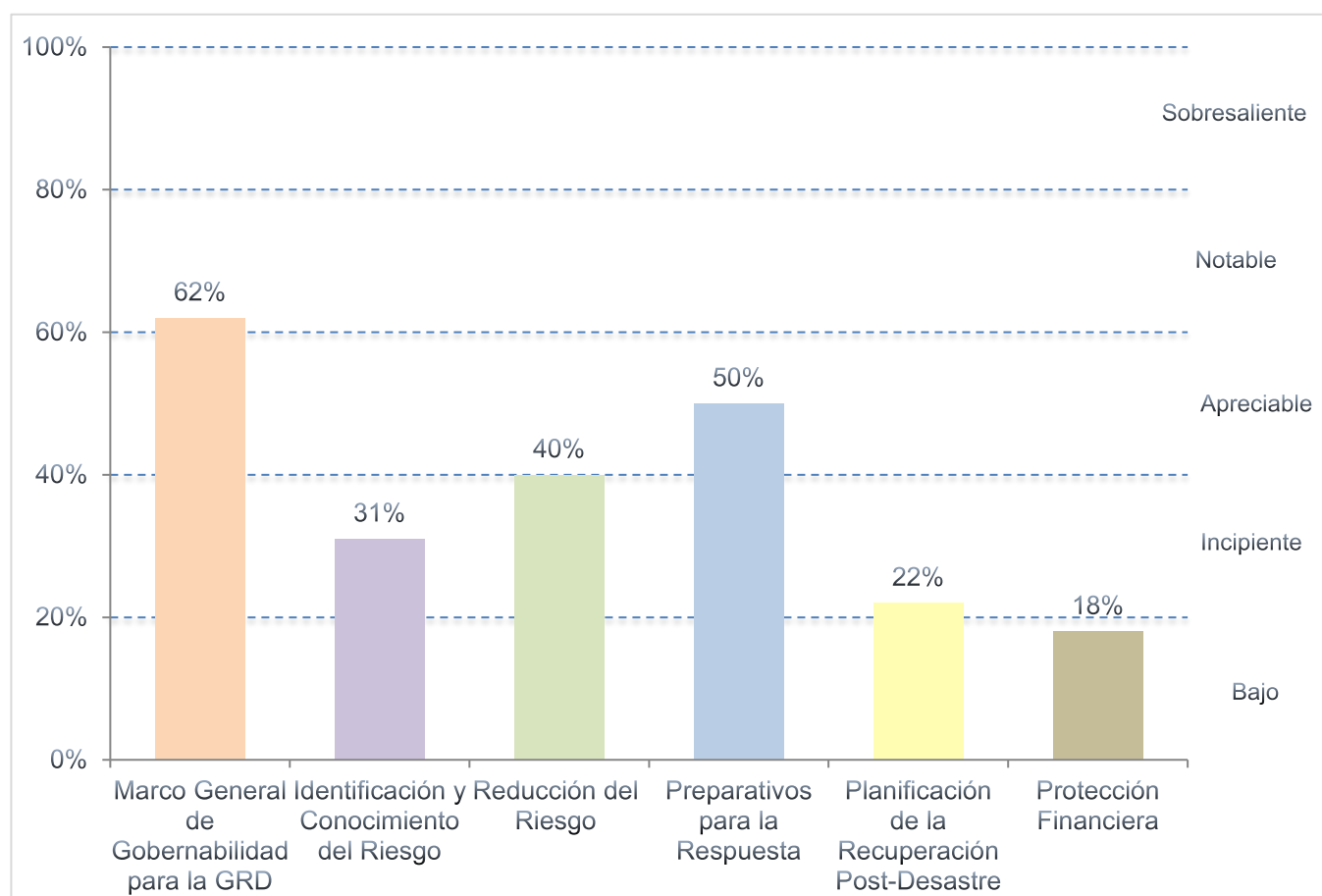
En el rango “bajo” se ubica la fase de “Evidencias de progreso en la implementación” (14%). Este nivel tan bajo de cumplimiento de indicadores podría indicar un desfase considerable entre lo que está estipulado en la normatividad – donde se aprecia un cumplimiento “apreciable” del “Marco General de Gobernabilidad para la GRD”, con un 62% – y lo que se está aplicando en realidad.

En los cuadros y gráficos siguientes se puede observar los niveles generales de cumplimiento de los indicadores del iGOPP:

**Cuadro 2: Componentes de reforma en política pública en GRD, según el iGOPP
Venezuela (noviembre 2015)**

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Marco general de gobernabilidad para la GRD | 62% |
| 2 | Identificación y conocimiento del riesgo | 31% |
| 3 | Reducción del riesgo | 40% |
| 4 | Preparativos para la respuesta | 50% |
| 5 | Planificación de la recuperación post - desastre | 22% |
| 6 | Protección financiera | 18% |

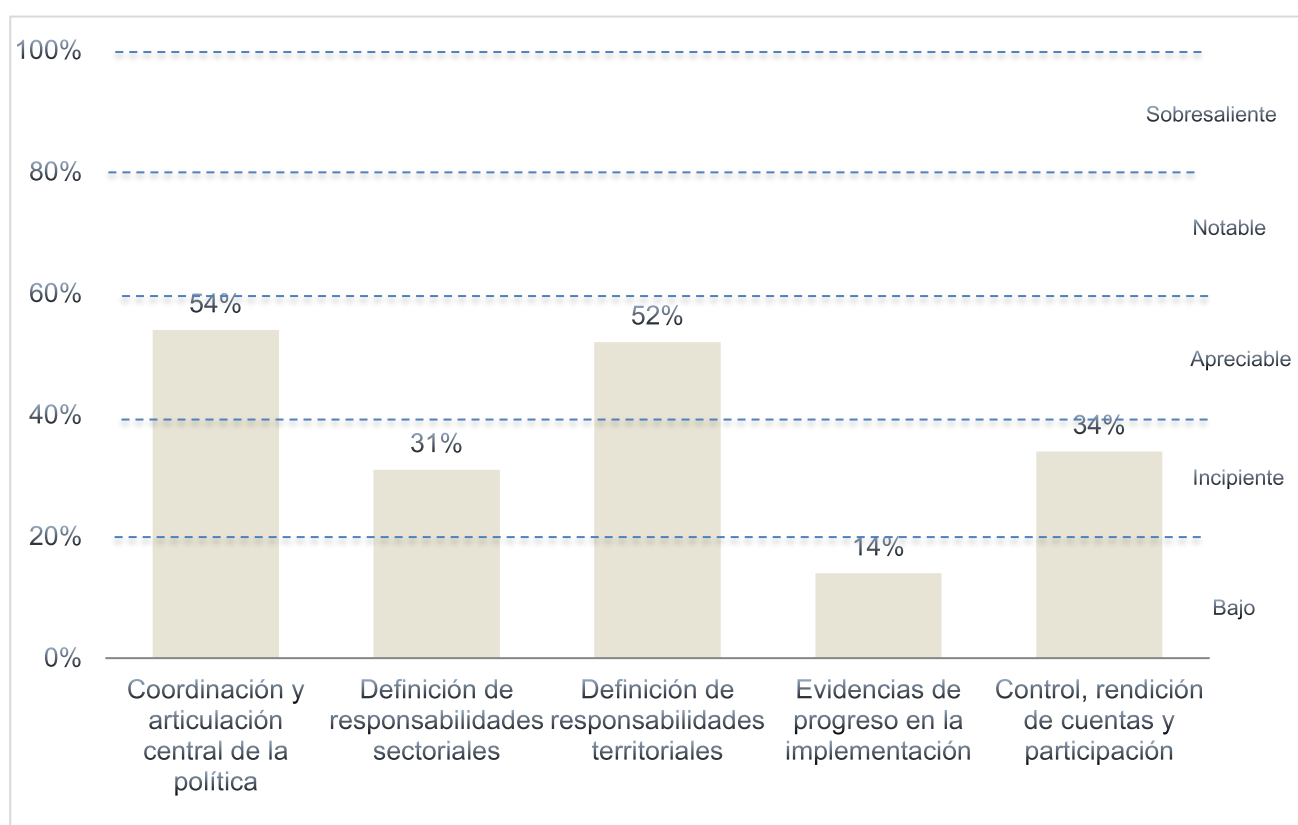
**Gráfico 3: Componentes de reforma en política pública en GRD según el iGOPP.
Venezuela (noviembre 2015)**



**Cuadro 3: Fases de la política pública en GRD según el iGOPP.
Venezuela (noviembre 2015)**

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 54% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 31% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 52% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 14% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 34% |

**Gráfico 4: Fases de la política pública en GRD según el iGOPP.
Venezuela (noviembre 2015)**



A continuación, se presenta, para cada componente de la GRD, un *análisis cualitativo de los indicadores*, organizado por cada una de las fases de la política pública: 1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política: 1.1. Coordinación y articulación central de la política, 1.2. Definición de responsabilidades sectoriales, 1.3 Definición de responsabilidades territoriales; 2. Implementación de la política: 2.1 Evidencias de progreso

en la implementación y 3. Evaluación de la política: 3.1. Control, rendición de cuentas y participación.

A. Marco general de gobernabilidad para la GRD (MG)

El conjunto de fases que integran el “Marco general de gobernabilidad para la GRD” (MG), alcanza un nivel de cumplimiento del 62%, lo que le ubica en el rango “Apreciable”. De igual forma, éste es el componente con el nivel más alto de cumplimiento de indicadores. Este resultado se explica en parte, por el hecho de que Venezuela realizó una actualización de su norma expresa en GRD, en el año 2009², con un enfoque moderno, que a la fecha de la aplicación del iGOPP, en noviembre de 2015, permitió un alcance elevado de indicadores.

Análisis cualitativo de indicadores por cada fase de la política pública

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (MG-1)

Dentro de esta fase se encuentran resultados diversos entre las subcategorías, lo que refleja distintos alcances en la inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política pública en Venezuela.

1.1 Coordinación y articulación central de la política:

Esta fase de la política pública tiene el segundo nivel **más alto** de cumplimiento de indicadores para el componente del “Marco General”, puesto que cumple con un 88% y se ubica en el rango “Notable”. Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de modernización del marco normativo nacional del 2009 ha permitido el desarrollo de estas condiciones de gobernabilidad³.

El único indicador que no se cumple tiene que ver con la inclusión de la gestión del riesgo dentro de las metas, fines, propósitos o resultados de la normatividad de Cambio Climático. Este indicador es sumamente relevante, puesto que apunta hacia la integración de políticas y la creación de sinergias.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase de la política pública se encuentra entre los niveles **más bajos** de este componente del iGOPP, con un resultado del 33.3%, el cual se clasifica como “*Incipiente*”. Esta fase cuenta

² Véase indicador MG-1A-1

³ Véase indicador MG-1A-1

con tres indicadores de alta relevancia para observar la integración entre políticas nacionales y sectoriales. Los indicadores relacionados con la integración de la Adaptación al cambio climático en la normatividad de recursos hídricos y de la GRD en la evaluación del impacto ambiental no se cumplen. Únicamente el indicador relacionado con la inclusión de la Gestión del riesgo en la normativa que regula la gestión integral del recurso hídrico⁴ se cumple.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

En este componente del iGOPP, esta fase de la política pública es la que presenta el mejor resultado, con un 100% de los indicadores cumplidos, clasificándose como “*Sobresaliente*”.

Fue posible constatar que la normatividad permite la descentralización en la planificación territorial, a través de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público del 17 de marzo de 2009⁵.

Con respecto a la existencia de un enfoque de cuencas o ecorregiones, La Ley de Aguas del 2 de enero de 2007, establece que "La gestión integral del agua tiene como unidad territorial básica la cuenca hidrográfica". Esta es una condición normativa de gran relevancia para desarrollar una visión comprehensiva del territorio y el riesgo⁶.

Por otra parte, la Constitución venezolana establece la posibilidad de realizar asociaciones entre Municipios en mancomunidades o la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público. De tal manera, el marco normativo nacional cumple con la condición de incentivar la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales en GRD⁷.

Dentro de este grupo de indicadores, también se cumple la condición de facultar la formación de estructuras de gestión territorial para la Gestión integrada de recursos hídricos⁸.

2. Implementación de la política (MG-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

Dentro de este componente, esta es la fase de la política pública que presenta el **menor cumplimiento de indicadores**, con una puntuación de 30%, lo cual se clasifica como

⁴ Véase indicador MG-1B-1

⁵ Véase indicador MG-1C-1

⁶ Véase indicador MG-1C-2

⁷ Véase indicador MG-1C-3

⁸ Véase indicador MG-1C-4

“*Incipiente*”. Al respecto, se encontró alcances solo en tres aspectos: 1) el ente responsable de la GRD ha recibido recursos en la última vigencia fiscal para sus funciones⁹; 2) existencia de un fondo nacional (Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil – FONBE) habilitado para financiar o cofinanciar actividades ex ante de GRD¹⁰; 3) un fondo nacional de desarrollo (*FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA*) habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante en gestión del riesgo de desastres¹¹.

Se han identificado en el presupuesto recursos asignados para financiar las actividades de rectoría y articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país¹², particularmente para “*fortalecer la capacidad de organización, coordinación y prestación de servicios en prevención y atención de los desastres*”. Cabe mencionar que Venezuela no cuenta con una herramienta que le permita identificar las asignaciones presupuestarias que se relacionan con programas en gestión del riesgo de desastres o con actividades de adaptación al cambio climático en otros sectores (ministerios), debido a la inexistencia de un clasificador presupuestal o instrumento de rastreo del gasto similar.

Por otra parte, el Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil – FONBE está habilitado para “*financiar proyectos orientados a la dotación y recuperación de equipos especializados para la prevención o atención de emergencias, incluyendo equipos para capacitación*”, es decir, está habilitado para financiar actividades ex ante de GRD¹³.

Con relación a otros recursos para financiar actividades ex ante de GRD, la “Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela” contempla dentro de sus actividades “*coadyuvar a disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, accidentalidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las hacen posible...*”. Es decir, hay evidencia de fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades ex ante de GRD¹⁴.

⁹ Véase indicador MG-2-2

¹⁰ Véase indicador MG-2-5

¹¹ Véase indicador MG-2-8

¹² Véase indicador MG-2-2

¹³ Véase indicador MG-2-5

¹⁴ Véase indicador MG-2-8

El país no cuenta con un documento de estrategia financiera para disminuir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres¹⁵. Además, no se identifican categorías o programas en el presupuesto a través de las cuales las diferentes entidades puedan solicitar recursos para actividades ex-ante de GRD¹⁶ o para actividades de adaptación al cambio climático¹⁷.

No se encontró evidencia de fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de cambio climático¹⁸. De otra parte, el país no cuenta con instrumentos presupuestales para incentivar a las unidades de gestión territorial y a los sectores a implementar acciones en gestión del riesgo de desastres¹⁹.

3. Evaluación de la política (MG-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

Esta fase de la política alcanza un 60% de indicadores cumplidos, lo cual se clasifica como *“Apreciable”*.

Existe normatividad para la transparencia de la gestión pública que puede ser aplicada a la GRD²⁰, ya que el país aprobó la reforma a la Ley contra la corrupción en 2014. Además, el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil ha realizado evaluación de la GRD con participación de sectores y territorios y, existen mecanismos de participación de la sociedad civil, aplicables a la gestión de riesgo²¹. Un aspecto importante en esta fase de política es la existencia de mecanismos de participación de la sociedad civil en la GRD, ya que la ley establece los “consejos comunales” como mecanismos permanentes de consulta²².

El ente nacional de control, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, no ha realizado evaluaciones del cumplimiento de la normativa existente en GRD, ya que esta función no se encuentra de forma explícita dentro de su marco de atribuciones.

¹⁵ Véase indicador MG-2-1

¹⁶ Véase indicador MG-2-3

¹⁷ Véase indicador MG-2-4

¹⁸ Véase indicador MG-2-6

¹⁹ Véase indicadores MG-2-9 y MG-2-10

²⁰ Véase indicador MG-3-2

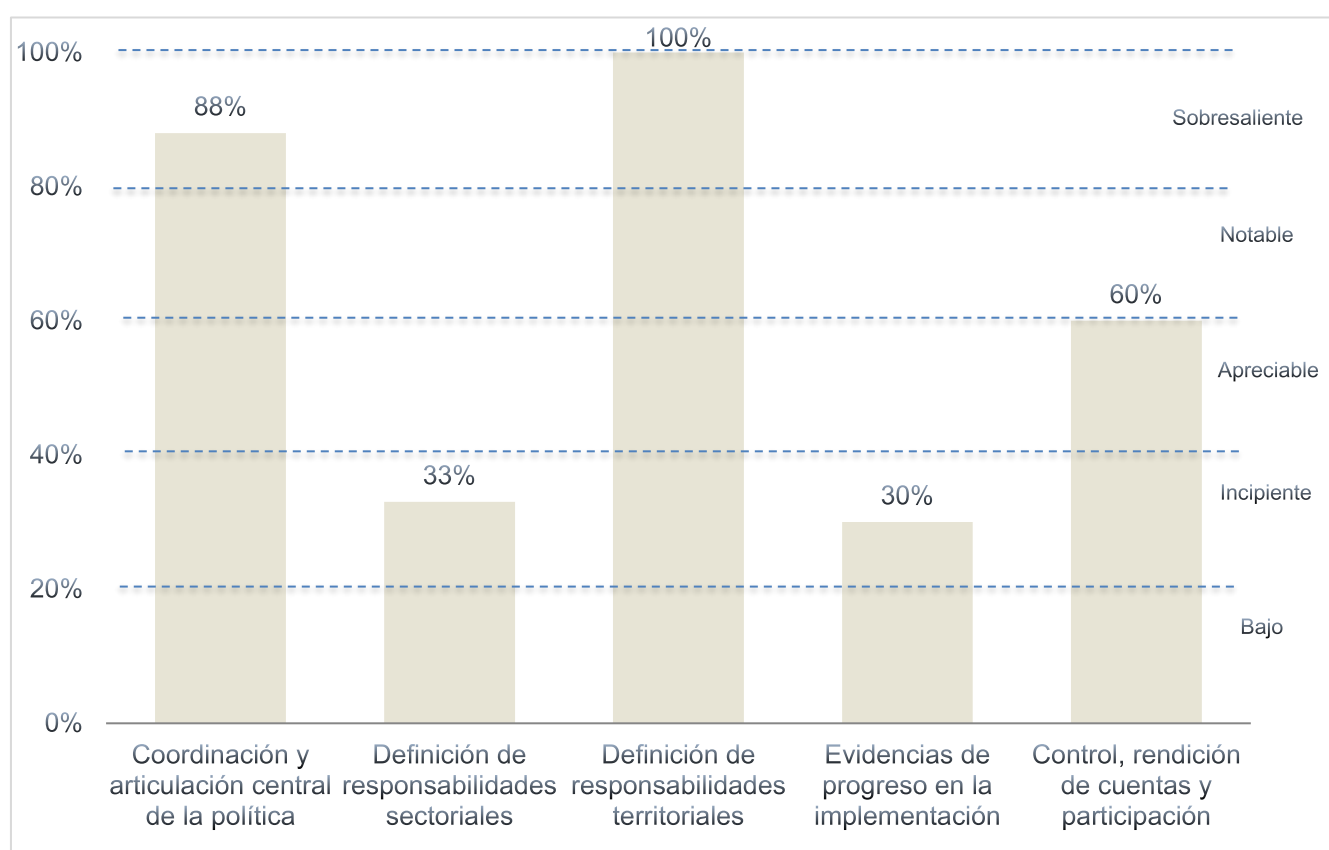
²¹ Véase indicador MG-3-4

²² Véase indicador MG-3-5

Cuadro 4: Marco General de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública. Venezuela (noviembre 2015)

| | | |
|---|--|------|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 88% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 33% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 100% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 30% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 60% |

Gráfico 5: Marco General de Gobernabilidad para la GRD por fases de la Política Pública. Venezuela (noviembre 2015)



B. Identificación y Conocimiento del Riesgo (IR)

El resultado de este componente da un 31% de indicadores cumplidos, con un rango de “Incipiente”. Este componente está llamado a ser la base de información y conocimiento necesaria para construir una adecuada gestión del riesgo, pero su nivel es el tercero más bajo.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (IR-1)

Los resultados de esta fase de la política pública, en sus tres subcategorías, se localizan en los niveles más altos, entre los rangos de “*Apreciable*” e “*Incipiente*”.

1.1 Coordinación y articulación central de la política

Esta fase de la política pública presenta un 50% de indicadores cumplidos, el cual se clasifica como “*Apreciable*”. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos establece la obligación de crear y dar mantenimiento a un Registro Nacional de Información²³; así como la creación y actualización de bases de datos sobre los efectos de los desastres²⁴. Un aspecto de gran relevancia en esta fase de la política pública, que no está contemplada en la normatividad nacional vigente, es la designación de un actor nacional responsable de la asistencia técnica y de la definición de lineamientos sobre el análisis de riesgo de desastre en los niveles sectorial y territorial.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase de la política pública presenta un resultado del 33%, el cual se clasifica como “*Incipiente*”. Un indicador muy importante que se cumple es la definición explícita de responsabilidades en los sectores para la realización de análisis de riesgo dentro de sus competencias, elemento que se encuentra integrado en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos de 2009²⁵. De igual forma se cumple el indicador relacionado con el desarrollo y mantenimiento de redes de observación de al menos dos fenómenos naturales²⁶.

En términos de las propias normativas sectoriales, únicamente en los sectores ambiental, vivienda, agua y saneamiento y energía²⁷ se define explícitamente la responsabilidad de realizar análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

²³ Véase indicador IR-1A-3

²⁴ Véase indicador IR-1A-4

²⁵ Véase indicador IR-1B-3

²⁶ Véase indicador IR-1B-7

²⁷ Véanse indicadores IR-1B-8 IR-1B-11 IR-1B-15 e IR-1B-17

En esta fase de la política pública se cumple uno de los tres indicadores que la componen (33%), lo que la califica en el rango “*Incipiente*”. Destacan como vacíos, la no definición de responsabilidades expresas para las unidades de gestión territorial, así como la inexistencia de un actor nacional que designe la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno.

Como aspecto positivo, se destaca la existencia de normativa que establece la obligatoriedad, en este caso por medio de una “Guía de elaboración Plan de Ordenación Urbanística”, de la zonificación de amenazas en las ciudades²⁸.

2. Implementación de la política (IR-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

Esta fase de la política pública cumple un 20% de los indicadores, con lo cual se clasifica en el rango “*Bajo*”. Algunos indicadores cumplidos son: 1) inclusión en los programas curriculares de educación de la temática de la GRD y el Cambio Climático²⁹ y, 2) que la empresa con la mayor facturación de generación, transmisión y distribución de energía ha realizado análisis de riesgo de desastres en su infraestructura³⁰.

La empresa de servicios públicos de energía asignó recursos para la identificación del riesgo de desastres³¹. La Corporación Eléctrica Nacional S.A, CORPOELEC con apoyo del BID realizó el estudio sobre “*Identificación y Reducción de la Vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ante las amenazas de eventos extremos hidrometeorológicos*”.

Con relación a las empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, y de telecomunicaciones, no se encontró evidencia de asignación de recursos para la identificación del riesgo de desastres³².

De otra parte, ninguno de los 10 sectores claves del país recibió recursos en la última vigencia fiscal (2015) para financiar actividades explícitas de identificación del riesgo de desastres, que se puedan verificar a través de instrumentos de clasificación presupuestal³³.

²⁸ Véase indicador IR-1C-3

²⁹ Véanse indicador IR-2-1 e IR-2-2

³⁰ Véase indicador IR-2-14

³¹ Véase indicadores IR-2-14

³² Véase indicadores IR-2-13 y IR-2-15

³³ Véase indicadores IR-2-3 a IR-2-12

3. Evaluación de la política (IR-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

Esta fase de la política alcanza un valor del 17% de indicadores cumplidos, y es la fase con menor cantidad de indicadores cumplidos en todo el componente. El resultado le ubica en el rango “*Bajo*”.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos, establece de forma obligatoria la disponibilidad de información para el análisis del riesgo y la creación de mecanismos para su intercambio³⁴.

La normatividad no incluye la obligatoriedad de evaluar los procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en las entidades nacionales responsables de generar información sobre los fenómenos geológicos, hidrológicos y meteorológicos.

Por otra parte, el ente nacional de control no ha realizado, en los últimos cinco años, una evaluación que analice la generación y disponibilidad de información sobre riesgo de desastres.

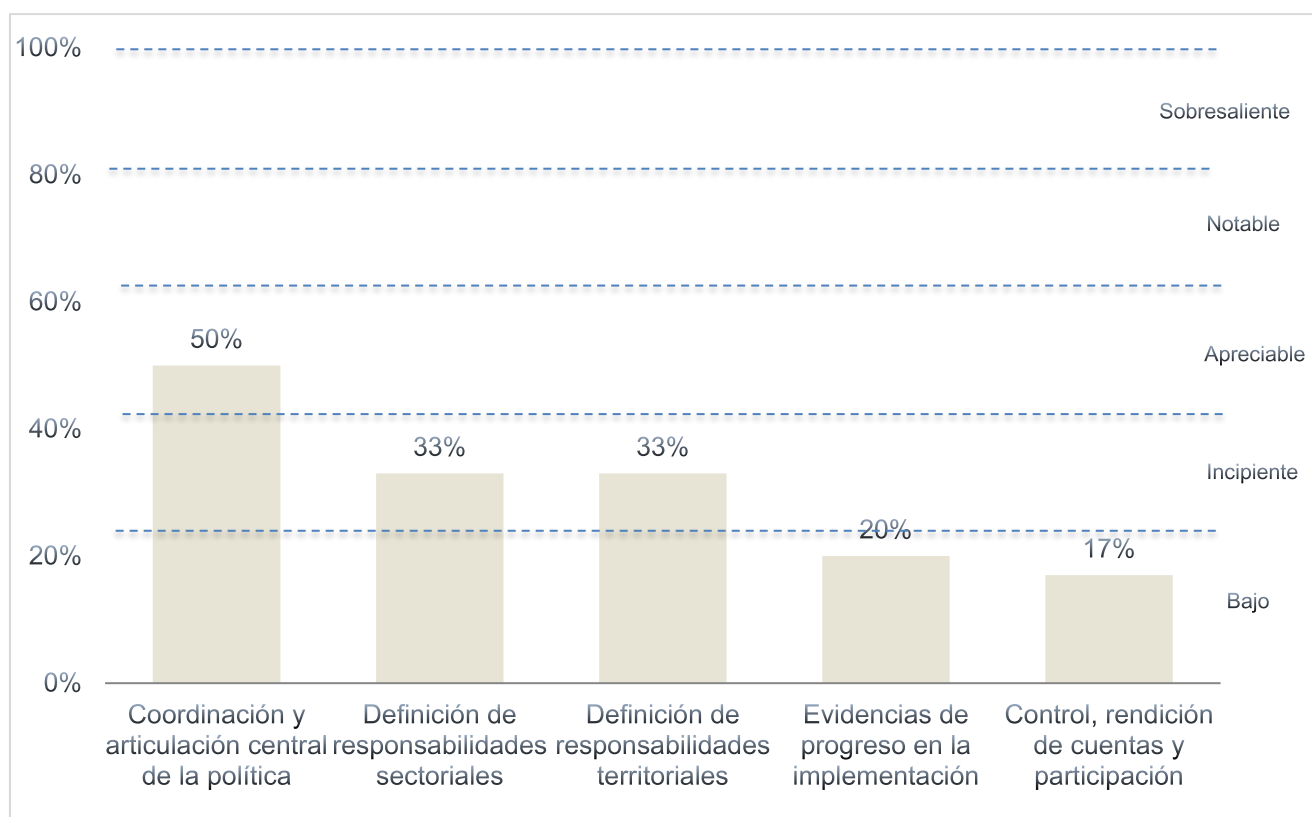
Se resume, seguidamente, en una tabla los resultados de este componente del iGOPP.

Cuadro 5: Identificación y conocimiento del riesgo (IR) según fases de la política pública. Venezuela (noviembre 2015)

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 50% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 33% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 33% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 20% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 17% |

³⁴ Véase indicador IR-3-6

Gráfico 6: Identificación y conocimiento del riesgo (IR) según fases de la política pública. Venezuela (noviembre 2015)



C. Reducción del Riesgo (RR)

Este componente alcanza un 40% de indicadores cumplidos, por lo que se categoriza como “*Incipiente*”. Este resultado lo ubica en el tercer lugar, antecedido por los componentes “Preparativos para la respuesta” (50%) y “Marco General de gobernabilidad para la GRD” (62%).

Análisis cualitativo de indicadores por cada fase de la política pública

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (RR-1)

Dos subcategorías dentro de esta fase alcanzan los rangos más altos de cumplimiento “Notable” y “Apreciable”, para todo el componente, como veremos más adelante.

1.1 Coordinación y articulación central de la política:

En esta sub-categoría se cumple un 60% de indicadores, con lo cual se clasifica en el rango “*Apreciable*”.

En esta fase se observa una articulación entre las políticas de GRD y el Cambio Climático mediante normativa. Lo anterior se logra con la “Ley del Plan de La Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”³⁵, donde se incorpora las variables de aumento de temperatura y adaptación de escenarios de manejo de riesgo.

Otro de los aspectos que contempla la normativa es que define referentes de riesgo aceptables en dos amenazas: sismos y viento³⁶. Además, se establecen en la norma rectora de GRD sanciones ante el incumplimiento de la normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de edificios e infraestructura de carácter pública y privada³⁷.

Algunos de los aspectos que no se cumplen son: la existencia de normatividad que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales; y la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura pública o privada.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta sub-categoría tiene el nivel de cumplimiento más bajo de la fase de “Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política” con un 32% de indicadores cumplidos, para un rango “*Incipiente*”.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias³⁸, con lo cual se cumple un indicador fundamental dentro de la base, sin embargo, solo en pocas ocasiones se da la misma responsabilidad dentro de las normativas sectoriales: Únicamente los sectores de salud y vivienda integran dentro de su normatividad la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias³⁹. Sectores como medio ambiente, agricultura, vivienda, educación, turismo, transporte, agua y saneamiento y telecomunicaciones no integran en su normativa la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias.

³⁵ Véase indicador RR-1A-1

³⁶ Véase indicador RR-1A-2

³⁷ Véase indicador RR-1A-4

³⁸ Véase indicador RR-1B-1

³⁹ Véanse indicadores RR-1B-9 y RR-1B-10

Este tipo de responsabilidad no está incluido dentro de las normas de las empresas prestadoras de servicios públicos en el ámbito de sus operaciones, ni en la legislación específica del servicio, ni en la norma sectorial que los cubre.

En el área de la construcción, existe normativa que contribuye en la reducción del riesgo de desastres al existir una norma nacional de seguridad para el diseño sísmo resistente de edificaciones, la cual es de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados: la Norma Venezolana COVENIN 1756-2:2001⁴⁰. Además, esta misma norma regula los aspectos técnicos de construcciones, donde define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales o infraestructura crítica (por ejemplo, escuelas y hospitales)⁴¹.

Relacionado al punto anterior, en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos se ordena realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto⁴², pero deja por fuera el respectivo análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión⁴³. De otra parte, no se encontró evidencia de normatividad que ordene la realización de estudios de cambio climático⁴⁴.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

Esta categoría presenta el nivel de cumplimiento más alto en este componente del iGOPP, con un resultado del 80% de indicadores cumplidos, el cual se clasifica en el rango “*Notable*”.

Un aspecto fundamental es que la normatividad establece la responsabilidad de las unidades de gestión territorial en la reducción del riesgo en el ámbito de su jurisdicción, tanto en la normatividad general de la gestión del riesgo⁴⁵ como en la norma particular que rige las unidades de gestión territorial en todas sus dimensiones⁴⁶.

Por otra parte, existen condiciones normativas para la reducción de riesgo de desastres en asentamientos humanos en zonas de riesgo,⁴⁷ a través de la creación de la “Gran Misión

⁴⁰ Véase indicador RR-1B-3

⁴¹ Véase indicador RR-1B-4

⁴² Véase indicador RR-1B-17

⁴³ Véase indicador RR-1B-19

⁴⁴ Véase indicador RR-1B-18

⁴⁵ Véase indicador RR-1C-1

⁴⁶ Véase indicador RR-1C-2

⁴⁷ Véase indicador RR-1C-4

Barrio Nuevo, Barrio Tricolor” en 2013, la cual integra aspectos de mejoramiento y relocalización.

El vacío principal en esta fase es que no existe normativa de ordenamiento territorial que establezca la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo.

2. Implementación de la política (RR-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

Dentro de este componente, esta es la fase de la política pública que representa el **menor cumplimiento de indicadores**, ya que solo se cumplió 1 indicador (8%), lo cual se clasifica como “*Bajo*”.

Solo se pudo evidenciar asignación de recursos en la última vigencia fiscal (2015) para actividades de reducción de riesgo de desastres para el sector de medio ambiente (construcción de colectores marginales y canalizaciones que contribuyen al saneamiento del río Guaire y a la mitigación de riesgos de desbordamiento del río)⁴⁸. Para los otros sectores considerados en el iGOPP no se encontró evidencia de asignación de recursos en la última vigencia fiscal (2015) para financiar actividades de reducción del riesgo de desastres que se puedan verificar a través de instrumentos presupuestales⁴⁹.

Es importante señalar que algunos sectores asignan recursos a actividades de reducción del riesgo de desastres que no pueden identificarse a través de instrumentos presupuestales debido a la inexistencia de un clasificador presupuestal o instrumento de rastreo del gasto similar. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para La Educación lidera el proyecto “Canaima Educativo”, el cual se basa en Actividades Digitalizadas para el Aprendizaje. Este programa educativo está dirigido al nivel de educación primaria. En el Quinto Grado de dicho nivel se imparten conocimientos sobre la Gestión Integral de Riesgo Socio Ambiental y Cultural, lo cual promueve una cultura de gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, dichos recursos están presupuestados dentro de partidas no específicas para GRD.

⁴⁸ Véase indicador RR-2-1

⁴⁹ Véanse indicadores RR-2-2 a RR-2-10

Con relación a las empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, no se encontró evidencia de asignación de recursos para actividades de reducción del riesgo de desastres⁵⁰.

3. Evaluación de la política (RR-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

En esta fase de la política pública se cumple un 20% de los indicadores, lo que le ubica en el rango “Bajo”.

El único indicador que se cumple se refiere al establecimiento de un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada (Ley Penal del Ambiente)⁵¹. Aspectos como la regulación de la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial, que asigne responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización, o la regulación de la planificación o manejo de cuencas hidrográficas que asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización, no se cumplen.

Tampoco se localizó evidencia de realización de evaluaciones por parte del ente de control sobre el cumplimiento de acciones en reducción de riesgo de desastres y en la aplicación de medidas de reducción del riesgo de desastres en la fase de construcción de proyectos de infraestructura.

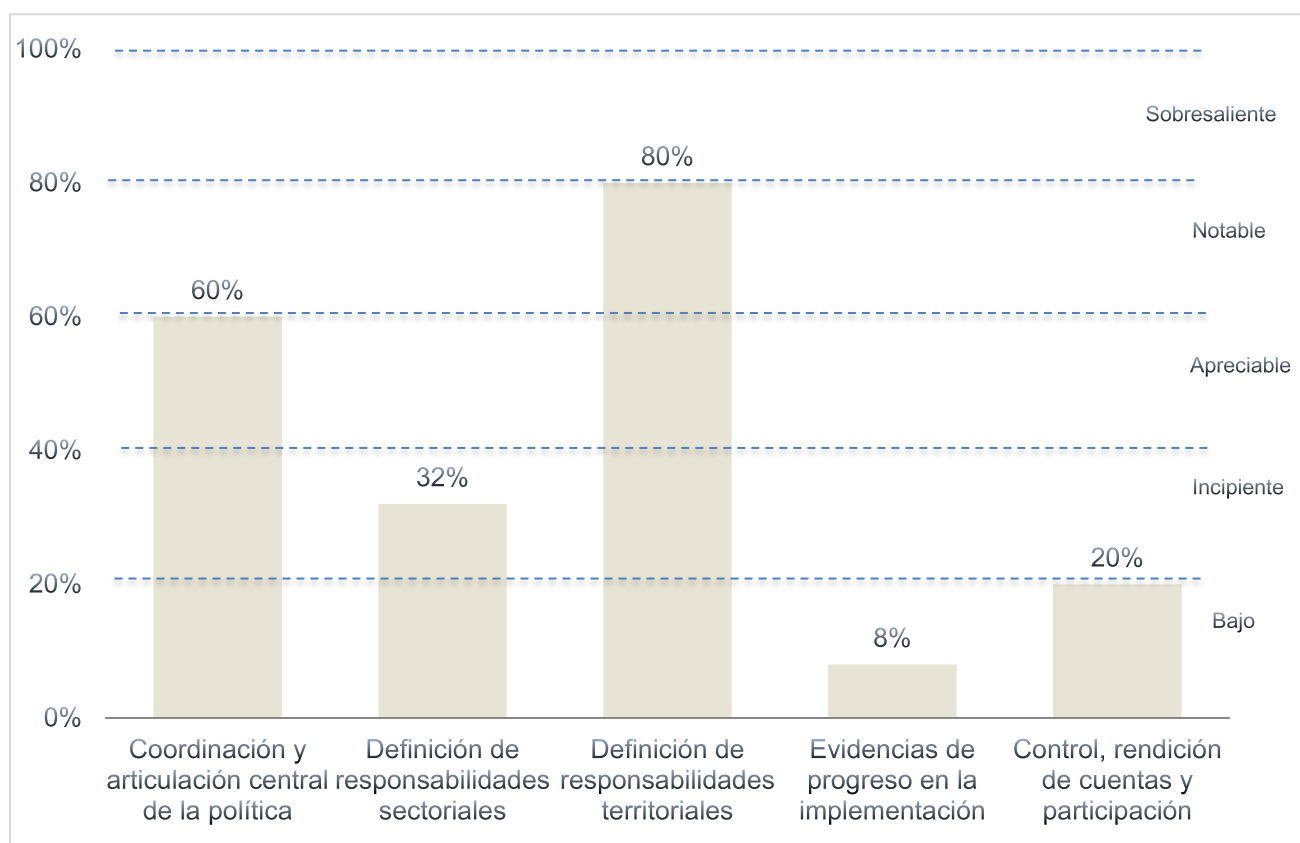
**Cuadro 6: Reducción del riesgo (RR) según fases de la política pública.
Venezuela (2016)**

| | | |
|----------|--|-----|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 60% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 32% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 80% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 8% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 20% |

⁵⁰ Véanse indicadores RR-2-11 a RR-2-13

⁵¹ Véase indicador RR-3-1

**Gráfico 7: Reducción del riesgo (RR) según fases de la política pública.
Venezuela (noviembre 2015)**



D. Preparativos para la Respuesta (PR)

Este componente presenta un cumplimiento del 50% de los indicadores, el cual es clasificado como “*apreciable*”. Este es el componente con los segundos mejores resultados en la aplicación del iGOPP.

Este resultado puede estar determinado por la dinámica que han seguido durante muchos años los países latinoamericanos, los cuales han diseñado sus estructuras de GRD más orientadas a la respuesta ante emergencias. La existencia de una “Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (noviembre de 2001), así como la introducción de criterios de preparación en varias normas sectoriales, son la base de este nivel de cumplimiento de indicadores.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (RR-1)

Los resultados de esta fase de la política pública, en sus tres subcategorías, se localizan en los niveles más altos, entre los rangos de “sobresaliente” y “apreciable”. Esto indica que los alcances en esta materia son semejantes entre los tres componentes, existiendo una inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política para la preparación para la respuesta de desastres.

1.1 Coordinación y articulación central de la política:

En esta sub-categoría se cumple un 38% de indicadores, lo cual se clasifica como “*Incipiente*”.

Uno de los aspectos en donde se cumple el indicador es la existencia de una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta. Se establece la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres como el órgano responsable de la planificación de la respuesta ante desastres y ordena “la articulación de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos, que garanticen la integración y coordinación de acciones entre los órganos de los poderes públicos nacional, estatal y municipal”, así como “la participación continua de las organizaciones que conforman los sectores económicos, sociales y técnicos, así como de las organizaciones no gubernamentales, a fin de asegurar la correcta administración de desastres”⁵². La Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres es parte de la estructura de coordinación del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil (ver Organigrama), con lo cual se asegura la articulación necesaria entre las instancias.

De igual forma, existe normatividad que regula la aplicación de régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública, esto en tres niveles: la Constitución Política, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, y la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de desastres⁵³. Esta última norma establece también la formulación de planes de emergencia a nivel nacional⁵⁴.

Los aspectos que no se cumplen son: 1) el establecimiento explícito de un mecanismo para el manejo de crisis por desastre al más alto nivel; 2) la existencia de normativa que regule

⁵² Véase indicador PR-1A-1

⁵³ Véase indicador PR-1A-4

⁵⁴ Véase indicador PR-1A-5

que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deben basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades; 3) normativa que regule la formulación de protocolos para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes; y 4) normativa que regule la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase de la política pública presenta un 65% de indicadores cumplidos, el cual se clasifica como “*Apreciable*”.

Es interesante observar que, a diferencia de otros componentes, en preparativos para la respuesta el país tiene una mayor presencia de normativas sectoriales con inclusión explícita de responsabilidades en el tema. Fue posible encontrar evidencia en los sectores de medio ambiente, agricultura salud, transporte, agua y saneamiento, telecomunicaciones y energía⁵⁵.

En términos de la obligatoriedad de formular e implementar planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres para las empresas de servicio público, se encontraron evidencias en telecomunicaciones y energía⁵⁶, mas no así para el servicio de agua y saneamiento.

Uno de los vacíos identificados es que no existe normativa que prevea la creación de sistema de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos.

Dos aspectos que se cumplen son la existencia de normatividad que mandate formular e implementar planes asociados al transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas⁵⁷, así como los asociados a derrames, combustión o contaminación por hidrocarburos⁵⁸.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

El resultado de esta fase de la política pública es de un cumplimiento de un 100 % de los cinco indicadores que la integran, clasificándose como “*Sobresaliente*”. Presenta el valor más alto de este componente del iGOPP. Es la única fase que presente este nivel de cumplimiento (en los componentes MG y PR).

⁵⁵ Véanse indicadores PR-1B-3 hasta 5 y PR-1B-9 hasta 12

⁵⁶ Véanse indicadores PR-1B-14 y 15

⁵⁷ Véase indicador PR-1B-16

⁵⁸ Véase indicador PR-1B-17

El decreto con fuerza de Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres establece instancias de coordinación en el territorio⁵⁹, la definición de criterios de asistencia subsidiaria entre niveles de gobierno⁶⁰, así como la formulación de planes de preparación en el territorio⁶¹. La reforma a la Ley orgánica del Poder municipal de 2010 establece competencias a los niveles territoriales⁶², y se autoriza a los municipios para la utilización de recursos fuera de su jurisdicción⁶³.

2. Implementación de la política (PR-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

Dentro de este componente, esta fase de la política pública representa el **menor cumplimiento de indicadores**, con un total de 13%, lo cual se clasifica como “*Bajo*”.

Las evidencias de cumplimiento en esta fase están concentradas en dos aspectos: 1) el ente nacional responsable ha recibido recursos en la última vigencia fiscal para la realización de estas labores⁶⁴; y 2) el servicio nacional de bomberos recibió recursos en la última vigencia fiscal para financiamiento de actividades de preparación para desastres⁶⁵.

Se pudo evidenciar, a través de instrumentos presupuestales, asignación de recursos para el ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta para *"Fortalecer la capacidad de organización, coordinación y prestación de servicios en prevención y atención de los desastres"*⁶⁶.

Además, se pudo evidenciar, a través de instrumentos presupuestales, asignación de recursos al servicio nacional de bomberos para actividades de preparación para desastres para la *"Creación de un sistema de información estadístico para el registro de los servicios de emergencias bomberiles a nivel nacional"* y para la *"Optimización del proceso de recaudación del Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias"*

⁵⁹ Véase indicador PR-1C-1

⁶⁰ Véase indicador PR-1C-2

⁶¹ Véase indicador PR-1C-3

⁶² Véase indicador PR-1C-4

⁶³ Véase indicador PR-1C-5

⁶⁴ Véase indicador PR-2-1

⁶⁵ Véase indicador PR-2-2

⁶⁶ Véase indicador PR-2-1

de Carácter Civil (Fonbe), que coadyuvará al financiamiento de programas y actividades que fortalezcan los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional"⁶⁷.

Cabe mencionar, que no se encontró asignación de recursos para la entidad responsable de la prevención y control de incendios forestales (Dirección General de Vigilancia y Control Ambiental)⁶⁸. De otra parte, no se encontró evidencia de planes de contingencia para ningún sector. No obstante, expertos del país en GRD manifestaron que los sectores de energía y salud cuentan con dichos planes, a los cuales no se pudo acceder. Solo se pudo evidenciar asignación de recursos por parte de los sectores de educación y transporte a actividades de preparación de la respuesta⁶⁹ en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, sin que estos recursos estén enmarcados dentro categorías o programas en el presupuesto a través de las cuales las diferentes entidades puedan solicitar recursos para actividades de GRD.

Con relación a las empresas de servicios públicos de agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones, no se encontró evidencia de existencia de planes de contingencia o emergencia⁷⁰. No obstante, expertos del país en GRD manifestaron que tanto la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) cuentan con dichos planes, a los cuales no se pudo acceder.

3. Evaluación de la política (PR-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

Esta fase de la política alcanza un 33% de los indicadores y es la segunda fase con el menor cumplimiento de indicadores en el componente. El resultado se clasifica como *"Incipiente"*.

El decreto con fuerza de ley, Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, establece mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la preparación para desastres⁷¹. La Norma COVENIN 3615:2004, "CAEL, Guía para su integración y funcionamiento", establece la participación y organización de la comunidad para conformar los Comités de Atención a Emergencias Locales.

⁶⁷ Véase indicador PR-2-2

⁶⁸ Véase indicador PR-2-3

⁶⁹ Véanse indicadores PR-2-4 a PR-2-12

⁷⁰ Véanse indicadores PR-2-13 a PR-2-15

⁷¹ Véase indicador PR-3-1

Por otra parte, se han habilitado mecanismos de participación comunitaria para la respuesta⁷². Un ejemplo es el Proyecto ANAUCO, creado después de los aludes torrenciales de 1999 ante la necesidad que vieron los habitantes de la zona de organizarse y buscar una solución urbanística que mitigara el riesgo por eventos naturales. El proyecto buscaba ejecutar un plan de desarrollo urbanístico comunitario que fortaleciera la capacidad de gestión de la comunidad, mitigando las condiciones de riesgo.

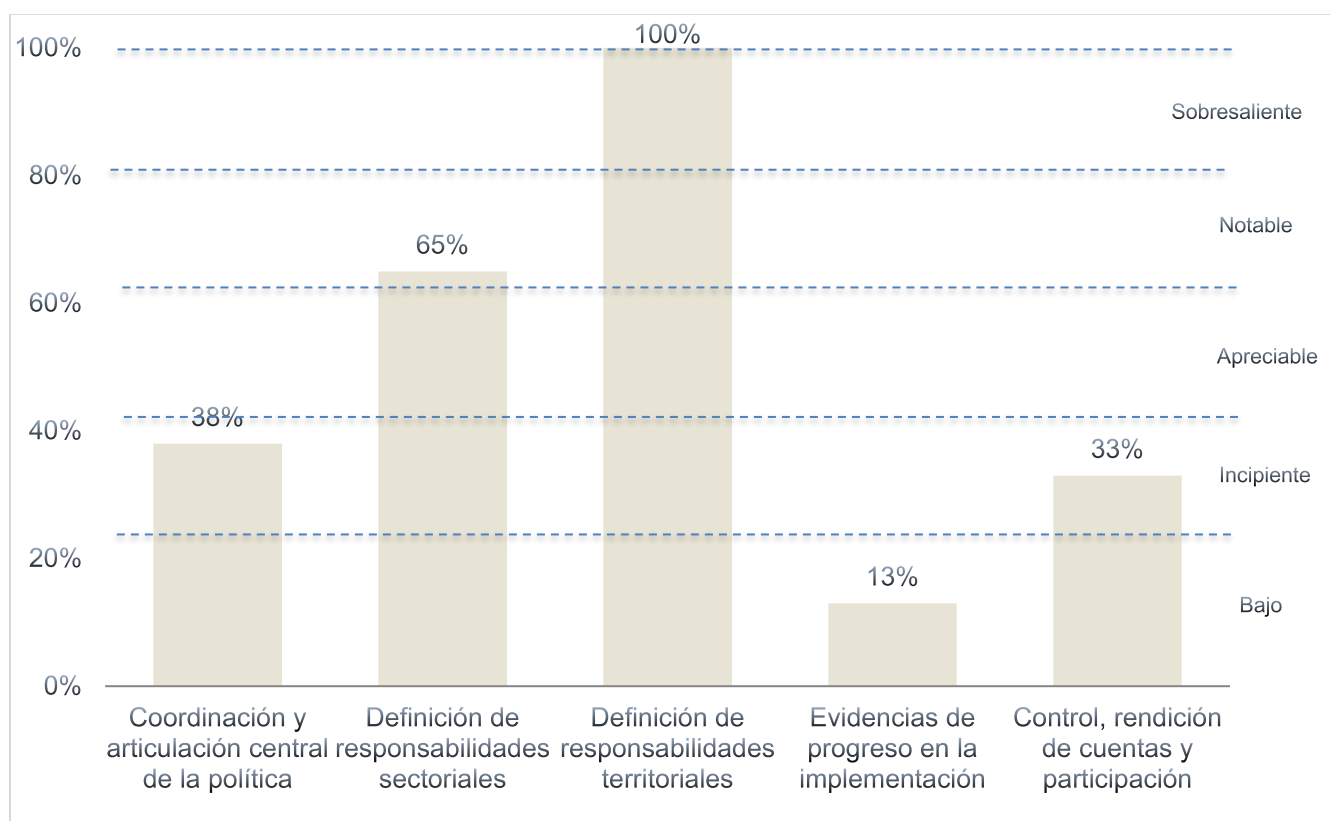
Los vacíos se concentran principalmente en que el ente nacional de control no ha realizado evaluaciones sobre preparativos a desastres o evaluaciones ex - post del desempeño del gobierno en la respuesta en una de las últimas cinco situaciones de desastre declaradas a nivel nacional. De igual forma, el ente nacional de coordinación de la preparación y la respuesta no ha realizado evaluaciones sobre la calidad de sus procesos.

**Cuadro 7: Preparación para la respuesta según fases de la política pública.
Venezuela (noviembre 2015)**

| | | |
|----------|--|------|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 38% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 65% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 100% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 13% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 33% |

⁷² Véase indicador PR-3-6

**Gráfico 8: Preparación para la respuesta según fases de la política pública.
Venezuela (noviembre 2015)**



E. Planificación de la recuperación post-desastre (RC)

Este componente alcanza un 22% de los indicadores, el cual se clasifica como “*Incipiente*”. Este representa **el penúltimo componente más bajo**, solo superado por el componente de “Protección Financiera”. Siguiendo la tendencia regional, en Venezuela hay reducidas condiciones de normatividad e implementación para el desarrollo de acciones de planificación de la recuperación, siguiendo las tendencias modernas de la gestión de riesgo.

Análisis cualitativo de indicadores por cada fase de la política pública

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (RC-1)

Los resultados de esta fase de la política pública, en sus tres subcategorías, se localizan en los niveles de “*incipiente*” y “*bajo*”.

1.1 Coordinación y articulación central de la política

Esta fase de la política pública presenta un resultado del 38% de los indicadores cumplidos, el cual se clasifica como un resultado “*Incipiente*”.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos de 2009 define responsabilidades del Estado frente a este componente, principalmente al asignar un responsable de la coordinación.⁷³ La Ley indica que el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos conformará una Coordinación de Reconstrucción para las áreas afectadas por desastre. De igual forma establece el esquema institucional para la coordinación de la reconstrucción post-desastre⁷⁴.

Un aspecto que resaltar es que la misma Ley ordena la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente, específicamente se establece poner especial énfasis en la reducción del riesgo⁷⁵.

No fue posible localizar evidencia en relación con: 1) la recuperación de medios de vida como un propósito de la recuperación; 2) la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes, y la obligatoriedad de formular planes de recuperación post desastre ex-ante; 3) la definición de la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción; y 4) la definición de la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase de la política pública no se cumple ninguno de los indicadores (0%), con lo cual se sitúa en el rango “*Bajo*”.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

En esta fase no se cumple ninguno de los indicadores (0%) lo cual le clasifica en el rango “*Bajo*”.

⁷³ Véase indicador RC-1A-1

⁷⁴ Véase indicador RC-1A-3

⁷⁵ Véase indicador RC-1A-5

2. Implementación de la política (RC-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

El resultado de esta fase de la política pública es de un cumplimiento de los indicadores de un 0%, clasificándose como “*Bajo*”.

3. Evaluación de la política (RC-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

En esta fase de la política se cumple un 75% de indicadores, lo que le clasifica en el rango “*Notable*”. Paradójicamente, dentro de un componente de tan reducido cumplimiento de indicadores, en esta fase se cumplen tres de los cuatro indicadores que la componen.

Fue posible constatar que existen mecanismos de participación de la sociedad civil (consejos comunales) en la recuperación post-desastre, según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos⁷⁶, así como la activación de mecanismos de información y participación comunitaria en el proceso de recuperación⁷⁷. De igual forma, se localizó evidencia sobre la activación de al menos un mecanismo de participación comunitaria para la recuperación⁷⁸.

A nivel de vacíos, se identifica que la Contraloría General de la República no ha realizado evaluaciones sobre la gestión del gobierno en la recuperación post-desastre, después de desastres de gran magnitud declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.

⁷⁶ Véase indicador RC-3-1

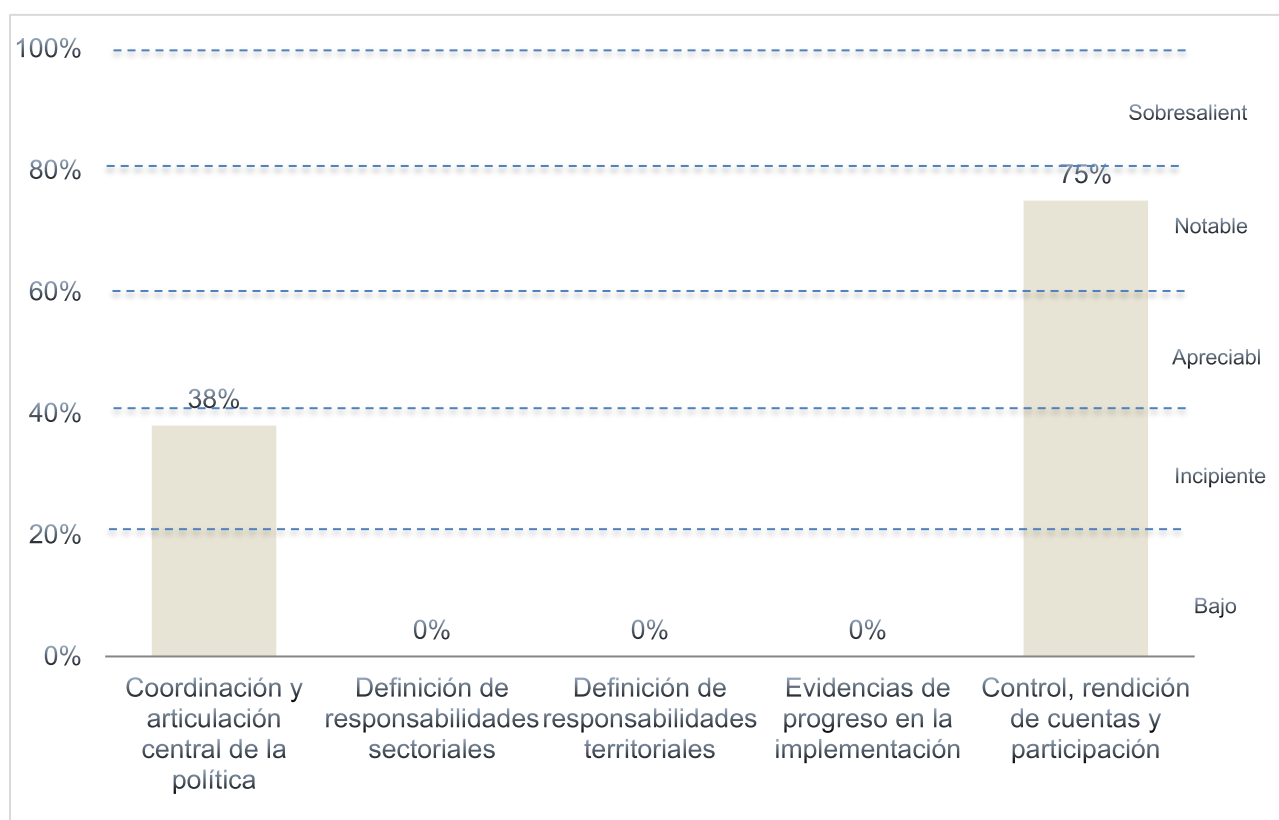
⁷⁷ Véase indicador RC-3-3

⁷⁸ Véase indicador RC-3-4

Cuadro 8: Planificación de la recuperación post-desastre según fases de la política pública. Venezuela (noviembre 2015)

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 38% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 0% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 0% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 0% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 75% |

Gráfico 9: Planificación de la recuperación post-desastre según fases de la política pública. Venezuela (noviembre 2015)



F. Protección Financiera (PF)

En este componente se cumple un 18% de los indicadores, lo cual le clasifica en el rango “bajo”. Este es el componente que dio el resultado más bajo en la aplicación del iGOPP en Venezuela.

1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política (PF-1)

Los resultados de esta fase de la política pública se clasifican en tres rangos “*apreciable*”, “*incipiente*” y “*bajo*”, lo cual demuestra la disparidad que existe en el cumplimiento. A pesar de lo anterior, esta fase es la que presenta los tres mejores resultados del componente, lo que indica que los mayores avances en esta materia se localizan en la inclusión de este tema en la agenda del gobierno y en la formulación de política para la protección financiera.

1.1 Coordinación y articulación central de la política

Esta fase de la política pública presenta el resultado más alto en este componente del iGOPP, con un resultado del 50% de indicadores cumplidos, lo que se clasifica como “*Apreciable*”.

Los alcances en esta fase están concentrados en que se establecen fuentes de recursos financieros a ser administrados bajo la figura de fideicomiso a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres, esto en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos⁷⁹. La misma Ley establece, además, el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional habilitados para gastos emergentes en situaciones de desastres⁸⁰.

La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos estipula como fuentes de recursos para el desarrollo del proceso de la gestión integral de riesgos en sus diferentes fases y etapas, incluyendo la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastres, entre otros: “... 4. Los recursos que destine el Estado para los procesos de reconstrucción de zonas afectadas por desastres; 5. Los recursos que destine el Estado de manera extraordinaria por cualquier título; 6. Los recursos que ingresen al Estado como producto de convenios de cooperación internacional o de ayuda humanitaria; 7. Los recursos equivalentes al uno por ciento (1%) del monto de las primas de las pólizas de seguros cobradas por las entidades aseguradoras en los ramos de siniestros causados por eventos socio naturales o tecnológicos; 8. Los recursos provenientes de particulares por cualquier título”. Estos recursos, que incluyen un porcentaje fijo de recursos a ser asignados (1% del monto de las primas de las pólizas de seguros cobradas por las entidades aseguradoras en los ramos de siniestros causados por eventos socio naturales o tecnológicos), serán mantenidos y

⁷⁹ Véase indicador PF-1A-1

⁸⁰ Véase indicador PF-1B-2

administrados en una entidad financiera estatal designada por el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos bajo la figura jurídica de fideicomiso⁸¹.

De otra parte, el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción está habilitado para financiar actividades de manejo de desastres⁸².

No se encontraron evidencias de normatividad que obligue a la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres⁸³.

El iGOPP permite identificar la falta de normatividad que estipule que la estimación de reservas para bienes tanto homogéneos/uniformes como no homogéneos/especiales debe estar sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector⁸⁴.

1.2 Definición de responsabilidades sectoriales

Esta fase de la política pública presenta un resultado del 25% de indicadores cumplidos, lo que se clasifica como “*Incipiente*”. El cumplimiento se da en razón a la existencia de normativa que define las situaciones en las cuales el Estado es responsable fiscalmente en caso de ocurrencia de desastres⁸⁵.

El iGOPP no encontró evidencias de que el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas tenga responsabilidades relacionadas con la definición de políticas y mecanismos de protección financiera⁸⁶. Además, el iGOPP permitió establecer la ausencia de normatividad sobre incentivos para el aseguramiento de la vivienda de los privados por riesgo de desastres⁸⁷. De otra parte, se estableció la ausencia de normatividad que estipule la obligatoriedad del aseguramiento de activos públicos de las entidades sectoriales⁸⁸.

1.3 Definición de responsabilidades territoriales

El resultado de esta fase de la política pública es de un cumplimiento de los indicadores de un 0%, clasificándose como “*Bajo*”.

⁸¹ Véanse indicadores PF-1A-1 y PF-1A-2

⁸² Véase indicador PF-1A-6

⁸³ Véase indicador PF-1A-3

⁸⁴ Véase indicadores PF-1A-4 y PF-1A-5

⁸⁵ Véase indicador PF-1B-1

⁸⁶ Véase indicador PF-1B-2

⁸⁷ Véase indicador PF-1B-4

⁸⁸ Véase indicador PF-1B-3

No se encontró normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en ciudades con más de 100 mil habitantes⁸⁹. De otra parte, se comprobó la ausencia de normatividad que estipule la obligatoriedad del aseguramiento de activos públicos de las entidades territoriales⁹⁰. Tampoco se obtuvieron evidencias de que la Ciudad de Caracas cuente con un fondo específicamente constituido para actividades de manejo de desastres⁹¹.

2. Implementación de la política (PF-2)

2.1 Evidencias de progreso en la implementación

Esta fase de la política pública representa un cumplimiento del 13%, lo cual se clasifica como “Bajo”.

En relación con los instrumentos de retención del riesgo, la normatividad estipula un fideicomiso para administrar los recursos para el desarrollo del proceso de la gestión integral de riesgos en sus diferentes fases y etapas⁹². Este cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo, y su administración se efectuará por contrato de administración con un fiduciario, el cual no se ha constituido, por lo cual al fondo no se le asignan recursos, es decir no se ha operativizado⁹³.

Con relación a los instrumentos habilitados para el manejo de desastres, la normatividad estipula que *el Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil* está habilitado para *"Financiar los programas de capacitación y proyectos contemplados dentro de las líneas de acción en materia de administración de emergencias..."*. Dicho fondo está operativizado, en razón a que cuenta con fuentes de financiamiento y con asignación de recursos⁹⁴. De otra parte, el Fondo cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo dado que la normatividad estipula que *"El Fondo deberá contar con una cuenta de reserva que tenga por objeto incrementar el patrimonio del Fondo durante el transcurso del tiempo, con el fin de disminuir progresivamente el impacto presupuestario de las actividades relacionadas con los planes y proyectos..."*⁹⁵. Cabe mencionar que dicha

⁸⁹ Véase indicador PF-1C-2

⁹⁰ Véase indicador PF-1C-1

⁹¹ Véase indicador PF-1C-3

⁹² Véase indicador PF-1A-1

⁹³ Véase indicador PF-1A-2

⁹⁴ Véase indicador PF-2-8

⁹⁵ Véase indicador PF-2-9

capacidad de acumulación no se estableció teniendo en cuenta una regla optima de acumulación⁹⁶.

Por otra parte, el país no cuenta con Préstamos Contingentes para Emergencias por Desastres⁹⁷. Respecto a instrumentos de transferencia del riesgo, como ya se mencionó no es obligatorio el aseguramiento de activos públicos, de manera consecuente, no se encontró evidencia de la existencia de estándares para el aseguramiento de activos públicos⁹⁸, ni de concesiones (a pesar de que existen algunas directrices generales)⁹⁹, ni de directrices al respecto para las entidades territoriales¹⁰⁰.

A nivel territorial, el iGOPP permitió verificar que la Ciudad de Caracas no cuenta con una estrategia de protección financiera¹⁰¹. Además, no se encontró evidencia de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad de la municipalidad¹⁰².

El iGOPP evidencia que existen instrumentos financieros ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres¹⁰³: La Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción establece *“un mecanismo de financiamiento especial para los proyectos de reconstrucción de infraestructura del país, requeridos ante la situación de calamidad nacional como la surgida de los recientes eventos climáticos que dejaron en situación de precariedad a amplios sectores del pueblo venezolano...La idea es incentivar la reactivación económica de centros estratégicos para la economía nacional”*.

El Decreto de Atención al Sector Agrario, establece las normas que regularán los beneficios, facilidades de pago y la reestructuración de financiamientos agrícolas, a ser concedidos a los deudores y deudoras de créditos destinados a la producción de rubros estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria, cuyo cumplimiento de pago sea afectado, total o parcialmente, como consecuencia de daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y la capacidad de desarrollo de las unidades productivas, a fin de contribuir a la recuperación,

⁹⁶ Véase indicador PF-2-10

⁹⁷ Véase indicador PF-2-11

⁹⁸ Véase indicador PF-2-4

⁹⁹ Véase indicador PF-2-5

¹⁰⁰ Véase indicador PF-2-7

¹⁰¹ Véase indicador PF-2-1

¹⁰² Véase indicador PF-2-12

¹⁰³ Véase indicador PF-2-14

ampliación y diversificación de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola nacional, e impulsar el desarrollo endógeno del país.

El iGOPP evidencia la ausencia de una estructura de protección financiera para el sector agrícola¹⁰⁴. Aun cuando existen pólizas de seguro contra riesgos múltiples para los cultivos anuales y perennes, principalmente para maíz, y seguros para ganadería, no existen otros instrumentos de protección financiera para el sector que complementen dichos seguros.

Respecto de estudios de dimensionamiento de riesgos, el país cuenta con la evaluación del riesgo catastrófico sísmico a nivel nacional para Venezuela y la evaluación del riesgo sísmico y por inundaciones a nivel local para el Municipio Chacao, realizados con apoyo financiero y técnico del BID. No obstante, las instituciones no se han empoderado de estos estudios¹⁰⁵. De otra parte, el país no cuenta con estudios para dimensionar las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes¹⁰⁶.

3. Evaluación de la política (PF-3)

3.1. Control, rendición de cuentas y participación

Esta fase de la política alcanza un valor del 0 % de indicadores cumplidos. Este resultado se clasifica como “*Bajo*”. El iGOPP revela la ausencia de control, rendición de cuentas y participación frente a este componente¹⁰⁷, pues ningún indicador ha sido cumplido. Es decir, se evidenció la ausencia de mecanismos de evaluación de cumplimiento de los mecanismos de protección financiera, del uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en el cálculo tarifario de las pólizas por parte de las compañías de seguros (en razón a que no es mandatado por la normatividad), y de la aplicación de procesos de protección financiera.

En la tabla y gráfico siguiente se resumen los resultados del componente de Protección Financiera del iGOPP.

¹⁰⁴ Véase indicador PF-2-15

¹⁰⁵ Véase indicador PF-2-2

¹⁰⁶ Véase indicador PF-2-3

¹⁰⁷ Véase indicadores PF-3-1 a PF-3-3

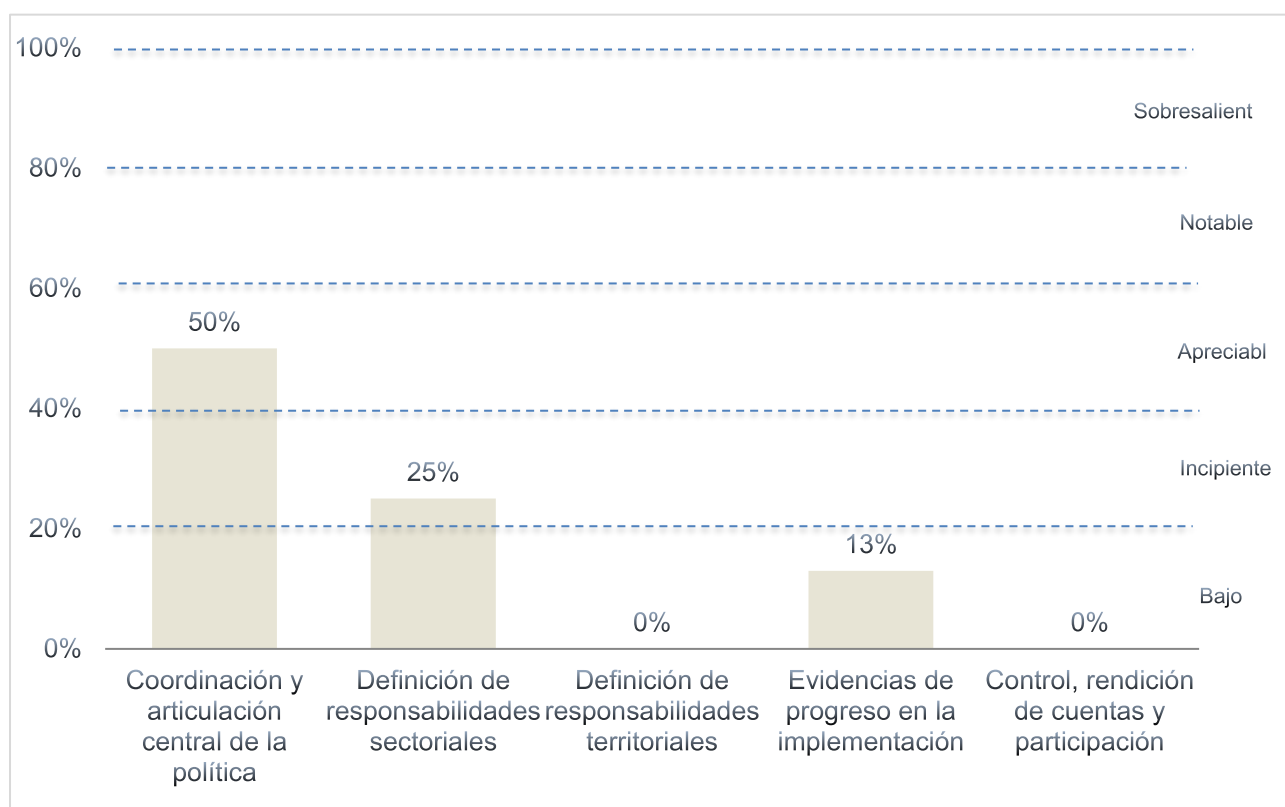
Cuadro 9: Protección financiera según fases de la política pública.

Venezuela (noviembre 2015)

| | | |
|----------|--|-----|
| 1 | Coordinación y articulación central de la política | 50% |
| 2 | Definición de responsabilidades sectoriales | 25% |
| 3 | Definición de responsabilidades territoriales | 0% |
| 4 | Evidencias de progreso en la implementación | 13% |
| 5 | Control, rendición de cuentas y participación | 0% |

Gráfico 10: Protección Financiera por fases de la Política Pública.

Venezuela (noviembre 2015)



4. Conclusiones

1. Venezuela actualizó su normativa sobre gestión de riesgo en el año 2009. Por esta razón una cantidad importante de indicadores relacionados con la fase de “Coordinación y articulación central de la política” se cumplen. Complementario a esto, Venezuela es el único país de la región que cuenta con una ley específica para los procesos de preparación y respuesta. Este es un caso interesante de observar ya que, en lugar de derogar la ley que cubre los procesos reactivos, el país optó por legislar de forma complementaria los aspectos prospectivos y correctivos y crear una instancia de coordinación de todos los procesos incluidos en ambas normativas.
2. La aplicación del índice muestra como el componente del “Marco General de Gobernabilidad en GRD” es el de mayor cumplimiento de indicadores, con un 62%. Le siguen los “Preparativos para la respuesta” con un 57%. Esto podría mostrar la existencia de una importante base normativa de carácter general, que aún no ha sido complementada con la adopción o implementación de normativa sectorial.
3. La fase de política pública con mayor nivel de cumplimiento a lo largo de los cinco componentes es la “Coordinación y articulación central de la política”, la cual alcanza un 54% de los indicadores. Aún en los componentes de más bajo cumplimiento de indicadores, esta fase se destaca con un alcance relativamente mayor: 50% en el componente de Protección Financiera y 38% en el componente de Planificación de la recuperación post-desastre.
4. El componente con menor cumplimiento de indicadores es el de “Protección financiera” con un 18%, lo que indica existen pocos mecanismos instalados para una adecuada retención y transferencia del riesgo de desastres, lo que provocaría que, ante la inminencia de una emergencia y posterior ocurrencia de un desastre, las estructuras institucionales tendrían una disminuida capacidad de respuesta debido a limitaciones en el acceso oportuno a recursos. Por esta razón, la protección financiera se constituye en una de las principales prioridades para los procesos de reforma de la normativa que se puedan emprender.
5. Al igual que en los demás países de la región el componente de “planificación de la recuperación post-desastre”, tiene un nivel de cumplimiento muy bajo, con un 22% de los indicadores cumplidos. El enfoque más complejo de recuperación, que se viene desarrollando en el marco conceptual y estratégico de la gestión de riesgo, no se encuentra presente aún en la normatividad venezolana. Destaca el hecho de que no

se cumple ninguno de los indicadores relacionados con responsabilidades sectoriales y territoriales, así como de evidencias de progreso en la implementación.

6. Una fortaleza que se identifica en la normatividad venezolana en la existencia de muchas condiciones positivas en el ámbito de la descentralización y la definición de responsabilidades territoriales. En general, esta fase alcanza un 52% de cumplimiento en los diferentes componentes. Tres componentes alcanzan niveles “Sobresaliente” y “Notable”: el Marco General, con un 100%; Preparativos de la Respuesta, con un 100%; y Reducción de Riesgo, con un 80%.
7. Contrario a lo anterior, la “Definición de responsabilidades sectoriales” tiene niveles menores de cumplimiento, con un 31% dentro de todos los componentes. En este sentido se puede observar que Venezuela es un país con una “normatividad expresa”, o un marco normativo específico de la gestión de riesgo mucho más desarrollado que a nivel de la normatividad de los sectores que componen su estructura de implementación.
8. La fase de menor cumplimiento es “Evidencias del progreso en la implementación”, con únicamente un 14% de indicadores. Este indicador puede estar marcando un importante vacío entre la definición de las normas y su implementación en la práctica. También, se explica por la ausencia de instrumentos presupuestales que permitan evidenciar la asignación de recursos a los diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres.
9. Ninguno de los componentes de la GRD o fases de política pública alcanza los rangos “Notable” o “Sobresaliente”. Esto muestra unas condiciones generales heterogéneas, dentro de los componentes.

5. Recomendaciones de reforma de política

| MG | Aspectos que incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Promover la adopción de normatividad en adaptación al cambio climático, que incluya criterios de articulación con la normatividad de gestión de riesgo y de gestión integral de recursos hídricos. | X | | |
| | Se recomienda la promoción de normatividad que incluya la adopción de una estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres. | X | | |
| | Promover incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones en gestión del riesgo de desastres. | X | | |
| | Promover incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones en gestión del riesgo de desastres. | | X | |
| | Promover la normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que la gestión del riesgo de desastres sea objeto de control por parte de las entidades de control. | X | | |

| IR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Promover normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis del riesgo de desastres y que establezca los criterios de calidad en estos procesos, así como la definición de cuáles son las edificaciones esenciales y la infraestructura crítica del país, expuesta a las amenazas. | X | | |
| | Se recomienda monitorear los procesos de reforma de la normatividad sectorial, a fin de que en estos se incluya la definición de responsabilidades en la identificación del riesgo. | X | | |
| | Promover que la normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establezca que las empresas prestadoras de servicios públicos sean responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones. | | X | |
| | Promover la existencia de normatividad que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el | | X | |

| IR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|-----------|--|-------------------------------------|---|--|
| | análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno. | | | |
| | Promover reformas normativas en la prestación de servicios públicos, de forma que estas incluyan la responsabilidad de realizar la identificación del riesgo de estos servicios. | X | | |
| | Se recomienda que los sectores asignen recursos a actividades de identificación del riesgo de desastres que puedan ser identificados a través de instrumentos presupuestales. | X | | |

| RR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--|
| | Promover que exista, al menos, una normativa nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones | X | | |

| RR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución | | | |
| | Aprovechar procesos de reforma de la normatividad de los sectores, de manera que se incluya explícitamente el mandato de realizar acciones para la reducción del riesgo de desastres. | | X | |
| | Promover la existencia de normativa que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada. | X | | |
| | Promover la normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que establezca que las empresas prestadoras de servicios públicos sean responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones. | | X | |
| | Promover que exista una normativa que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión, así como promover legislación | | X | |

| RR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | que obligue a considerar estudios de cambio climático dentro de los requerimientos para aprobar inversiones públicas. | | | |
| | Promover normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), que establezca la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo. | X | | |
| | Se recomienda que el ente nacional de control establezca mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres. | | X | |
| | Se recomienda que los sectores asignen recursos a actividades de reducción del riesgo de desastres que puedan ser identificados a través de instrumentos presupuestales. | X | | |

| PR | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Promover normativa que establezca la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes. | | X | |
| | Promover la adopción de normativa para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre. | | X | |
| | Se recomienda que los sectores asignen recursos a actividades de preparación de respuesta que puedan ser identificados a través de instrumentos presupuestales y que desarrollen planes de contingencia sectoriales ante la ocurrencia de desastres. | X | | |
| | Promover la normativa que prevea la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos. | X | | |
| | Promover que la entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta realice evaluaciones sobre la calidad en sus procesos. | | X | |

| RC | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Promover la creación de normativa que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre. | X | | |
| | Promover la adopción de normativa que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres como fuente para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes. | X | | |
| | Promover la adopción de normativa que ordene la formulación <i>ex ante</i> de planes de recuperación post desastre. | X | | |
| | Promover la adopción de normativa que establezca que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción. | X | | |
| | Promover normatividad que establezca que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del | | X | |

| RC | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--|
| | periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas. | | | |
| | Promover la adopción de normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas. | X | | |
| | Promover la adopción de normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas. | | X | |

| PF | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--|
| | Promover la adopción de normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país. | X | | |

| PF | Aspectos a incluir | Corto Plazo (1 a 4 años) | Mediano Plazo (4-8 años) | Largo Plazo (+ de 8 años) |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Promover la adopción de normatividad que establezca la obligatoriedad del aseguramiento de los activos públicos a nivel sectorial y territorial. | | X | |
| | Promover una estructura de protección financiera del sector agricultura frente al riesgo de desastres. | | | X |
| | Se recomienda que la ciudad capital diseñe e implemente una estrategia financiera de gestión del riesgo de desastres. | | X | |
| | Se recomienda generar incentivos para promover el aseguramiento de la vivienda de los privados. | | | X |

Anexo 1: Lista de Indicadores

| Componente del índice: Marco general de la gobernabilidad [MG] | | |
|--|--|------------|
| | | |
| MG-1A Coordinación y articulación central de la política | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | Respuestas |
| MG-1A-1 | ¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno? | Sí |
| MG-1A-2 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece instrumentos de política para su implementación? | Sí |
| MG-1A-3 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la coordinación y articulación de los instrumentos de política se debe realizar desde un nivel jerárquico igual o superior al ministerial? | Sí |
| MG-1A-4 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece la articulación con otras normas relacionadas con la Adaptación al Cambio Climático, gestión integrada de recursos hídricos, o planificación y ordenamiento del territorio? | Sí |
| MG-1A-5 | ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en la gestión del riesgo de desastres? | Sí |
| MG-1A-6 | ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en ACC? | Sí |
| MG-1A-7 | ¿Existe normatividad de cambio climático que establece la gestión del riesgo de desastres como una meta, fin, propósito o resultado? | No |
| MG-1A-8 | ¿Existe normatividad que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública aplicable a las entidades responsables de la GRD en el país? | Sí |
| | | |
| MG-1B Definición de responsabilidades sectoriales | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | Respuestas |
| MG-1B-1 | ¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado? | Sí |
| MG-1B-2 | ¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la adaptación al cambio climático como un propósito, fin o resultado? | No |
| MG-1B-3 | ¿La normatividad que regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental (o proceso equivalente), integra el análisis de riesgo de desastres? | No |
| | | |
| MG-1C Definición de responsabilidades territoriales | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | Respuestas |
| MG-1C-1 | ¿Existe normatividad que descentralice las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio a las unidades de gestión territorial? | Sí |
| MG-1C-2 | ¿Existe normatividad que establece un enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos? | Sí |
| MG-1C-3 | ¿Existe normatividad que faculte a las Unidades de Gestión Territorial para la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales en GRD? | Sí |

| | | |
|---|---|-------------------|
| MG-1C-4 | ¿Existe normatividad que faculte la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas? | Sí |
| | | |
| MG-2 Evidencias de progreso en la implementación | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | Respuestas |
| MG-2-1 | ¿Existe un documento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) que establece la estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país? | No |
| MG-2-2 | ¿El ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal? | Sí |
| MG-2-3 | ¿Existe un objeto de gasto o clasificador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres? | No |
| MG-2-4 | ¿Existe un objeto de gasto o clasificador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático? | No |
| MG-2-5 | ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres? | Sí |
| MG-2-6 | ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio climático? | No |
| MG-2-7 | ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado? | No |
| MG-2-8 | ¿Al menos uno de los tres fondos nacionales de desarrollo (o instrumento equivalente) con mayor asignación de recursos, está habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex ante</i> en gestión del riesgo de desastres? | Sí |
| MG-2-9 | ¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones en gestión del riesgo de desastre <i>ex ante</i> ? | No |
| MG-2-10 | ¿Existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones en gestión del riesgo de desastres <i>ex ante</i> ? | No |
| | | |
| MG-3 Control, rendición de cuentas y participación | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | Respuestas |
| MG-3-1 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser objeto de control por parte de las entidades de control? | No |
| MG-3-2 | ¿Existe normatividad sobre transparencia en la gestión pública? | Sí |
| MG-3-3 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres en los últimos 5 años? | No |
| MG-3-4 | ¿La entidad nacional coordinadora de la GRD ha realizado en los últimos 3 años una evaluación de la gestión del riesgo de desastres en el país con participación de sectores y niveles territoriales? | Sí |
| MG-3-5 | ¿Existe al menos un mecanismo de participación de la sociedad civil aplicable a la gestión del riesgo de desastres? | Sí |

| Componente del índice: Identificación y conocimiento del riesgo [IR] | | |
|--|---|----|
| | | |
| IR-1A Coordinación y articulación central de la política | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| IR-1A-1 | ¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis del riesgo de desastres? | No |
| IR-1A-2 | ¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático? | No |
| IR-1A-3 | ¿Existe normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres? | Sí |
| IR-1A-4 | ¿Existe normatividad que establezca crear, sistematizar o actualizar bases de datos sobre los efectos de los desastres? | Sí |
| | | |
| IR-1B Definición de responsabilidades sectoriales | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| IR-1B-1 | ¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos? | No |
| IR-1B-2 | ¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos? | No |
| IR-1B-3 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales? | Sí |
| IR-1B-4 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones? | No |
| IR-1B-5 | ¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país? | No |
| IR-1B-6 | ¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país? | No |
| IR-1B-7 | ¿Existe normatividad para un desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de al menos dos fenómenos naturales peligrosos en el país? | Sí |
| IR-1B-8 | ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| IR-1B-9 | ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-10 | ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-11 | ¿La normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| IR-1B-12 | ¿La normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |

| | | |
|--|---|----|
| IR-1B-13 | ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-14 | ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-15 | ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-16 | ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | No |
| IR-1B-17 | ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| IR-1B-18 | ¿Existe al menos una norma que defina cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país? | Sí |
| | | |
| IR-1C Definición de responsabilidades territoriales | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| IR-1C-1 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la evaluación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios? | No |
| IR-1C-2 | ¿Existe normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar las amenazas o riesgos en el territorio o bien que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno? | No |
| IR-1C-3 | ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de la zonificación de amenazas en ciudades? | Sí |
| | | |
| IR-2 Evidencias de progreso en la implementación | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| IR-2-1 | ¿Se integra la temática de riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario? | Sí |
| IR-2-2 | ¿Se integra la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario? | Sí |
| IR-2-3 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-4 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-5 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-6 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-7 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |

| | | |
|---|---|----|
| IR-2-8 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-9 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-10 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-11 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-12 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| IR-2-13 | ¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? | No |
| IR-2-14 | ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? (NOTA: en caso de que no sea la misma empresa, tendría que cumplirse para cada una de ellas) | Sí |
| IR-2-15 | ¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? | No |
| IR-3 Control, rendición de cuentas y participación | | |
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| IR-3-1 | ¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para el análisis de riesgo y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio? | Sí |
| IR-3-2 | ¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para estudios sobre cambio climático y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio? | No |
| IR-3-3 | ¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años? | No |
| IR-3-4 | ¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años? | No |
| IR-3-5 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres en los últimos 5 años? | No |
| IR-3-6 | ¿La normatividad nacional de GRD establece la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastre? | No |

Componente del índice: Reducción del riesgo de desastres [RR]

| RR-1A Coordinación y articulación central de la política | | |
|--|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RR-1A-1 | ¿Existe normatividad que establece competencias <i>de forma articulada</i> entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para las entidades territoriales y sectoriales? | Sí |
| RR-1A-2 | ¿Existe normativa que defina referentes de riesgo aceptable para al menos 2 amenazas en el país? | Sí |
| RR-1A-3 | ¿Existe al menos una norma nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución? | No |
| RR-1A-4 | ¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado? | Sí |
| RR-1A-5 | ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada? | No |

| RR-1B Definición de responsabilidades sectoriales | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RR-1B-1 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales? | Sí |
| RR-1B-2 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones? | No |
| RR-1B-3 | ¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el diseño sismo resistente de edificaciones, o similar (por ejemplo: ¿viento), que sea de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados? | Sí |
| RR-1B-4 | ¿La normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones, define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país? | Sí |
| RR-1B-5 | ¿La norma sismo-resistente ha sido revisada al menos una vez en los últimos 10 años? | No |
| RR-1B-6 | ¿La normatividad que regula la gestión ambiental integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres? | No |
| RR-1B-7 | ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-8 | ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-9 | ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| RR-1B-10 | ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| RR-1B-11 | ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-12 | ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-13 | ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-14 | ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-15 | ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-16 | ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| RR-1B-17 | ¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto? | Sí |
| RR-1B-18 | ¿Existe normatividad que ordene integrar en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático? | No |
| RR-1B-19 | ¿Existe normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión? | No |

| RR-1C Definición de responsabilidades territoriales | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RR-1C-1 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios? | Sí |
| RR-1C-2 | ¿La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, establece la reducción del riesgo de desastres como una de sus competencias? | Sí |
| RR-1C-3 | ¿La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), establece la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo? | No |
| RR-1C-4 | ¿Existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos? | Sí |
| RR-1C-5 | ¿Existe normatividad para la relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo? | Sí |

| RR-2 Evidencias de progreso en la implementación | | |
|--|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RR-2-1 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | Sí |
| RR-2-2 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-3 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-4 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-5 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-6 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-7 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-8 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-9 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-10 | ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal? | No |
| RR-2-11 | ¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? | No |

| | | |
|---------|--|----|
| RR-2-12 | ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? (NOTA: en caso de que no sea la misma empresa, tendría que cumplirse para cada una de ellas) | No |
| RR-2-13 | ¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años? | No |

| RR-3 Control, rendición de cuentas y participación | | |
|--|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RR-3-1 | ¿Existe normatividad que establezca un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada? | Sí |
| RR-3-2 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años? | No |
| RR-3-3 | ¿La normatividad que regula la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (o similares), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización? | No |
| RR-3-4 | ¿La normatividad que regula la planificación o manejo de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización? | No |
| RR-3-5 | ¿El ente nacional de control o ente regulador del sector, ha realizado al menos una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años? | No |

| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
|---------|--|----|
| PR-1A-1 | ¿Existe normatividad que establece una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta? | Sí |
| PR-1A-2 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece un mecanismo, instancia o instrumento de manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional? | No |
| PR-1A-3 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes? | No |
| PR-1A-4 | ¿Existe normatividad que permite activar un régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública? | Sí |
| PR-1A-5 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional? | Sí |
| PR-1A-6 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deban basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades? | No |
| PR-1A-7 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la realización de simulacros y simulaciones? | No |
| PR-1A-8 | ¿Existe normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre? | No |

| PR-1B. Definición de responsabilidades sectoriales | | |
|--|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| PR-1B-1 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diferentes sectores o ministerios? | No |
| PR-1B-2 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, prevé la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos? | No |
| PR-1B-3 | ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-4 | ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-5 | ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-6 | ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| PR-1B-7 | ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| PR-1B-8 | ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | No |
| PR-1B-9 | ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-10 | ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación en caso de desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-11 | ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |

| | | |
|----------|---|----|
| PR-1B-12 | ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias? | Sí |
| PR-1B-13 | ¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, obliga la formulación e implementación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres? | No |
| PR-1B-14 | ¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres? | Sí |
| PR-1B-15 | ¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de energía, obliga la formulación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres? | Sí |
| PR-1B-16 | ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas? | Sí |
| PR-1B-17 | ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia ante derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos? | Sí |

| PR-1C. Definición de responsabilidades territoriales | | |
|--|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| PR-1C-1 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta estipula instancias de coordinación en el territorio? | Sí |
| PR-1C-2 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece criterios de asistencia subsidiaria entre diferentes niveles de gobierno? | Sí |
| PR-1C-3 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia al nivel territorial? | Sí |
| PR-1C-4 | ¿Existe normatividad, distinta de la de GRD o preparativos, que define competencias para las unidades de gestión territorial en preparación y respuesta? | Sí |
| PR-1C-5 | ¿Existe normatividad que habilita a los municipios a utilizar sus recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia? | Sí |

| PR-2. Evidencias de progreso en la implementación | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| PR-2-1 | ¿El ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal? | Sí |
| PR-2-2 | ¿Al menos un servicio nacional de bomberos ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal? | Sí |
| PR-2-3 | ¿La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-4 | ¿Cuenta el sector ambiental con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| PR-2-5 | ¿Cuenta el sector agricultura con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-6 | ¿Cuenta el sector salud con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-7 | ¿Cuenta el sector vivienda con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |

| | | |
|---------|--|----|
| PR-2-8 | ¿Cuenta el sector educación con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-9 | ¿Cuenta el sector turismo con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| PR-2-10 | ¿Cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-11 | ¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-12 | ¿Cuenta el sector energía con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal? | No |
| PR-2-13 | ¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? | No |
| PR-2-14 | ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? (NOTA: en caso de no ser la misma empresa, deben cumplirlo todas) | No |
| PR-2-15 | ¿La empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? | No |

| PR-3. Control, rendición de cuentas y participación | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| PR-3-1 | ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación de la sociedad civil en todas las unidades de gestión territorial? | Sí |
| PR-3-2 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre preparativos para desastre en los últimos 5 años? | No |
| PR-3-3 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional? | No |
| PR-3-4 | ¿La entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta ha realizado al menos una evaluación sobre la calidad en sus procesos en los últimos 3 años? | No |
| PR-3-5 | ¿Las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, han adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal? | No |
| PR-3-6 | ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la respuesta? | Sí |

| RC-1A. Coordinación y articulación central de la política | | |
|---|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RC-1A-1 | ¿Existe normatividad sobre recuperación post-desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso? | Sí |
| RC-1A-2 | ¿Existe normatividad que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre? | No |
| RC-1A-3 | ¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre? | Sí |
| RC-1A-4 | ¿Existe normatividad que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes? | No |
| RC-1A-5 | ¿Existe normatividad que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente? | Sí |
| RC-1A-6 | ¿Existe normatividad que ordene la formulación <i>ex ante</i> de planes de recuperación post desastre? | No |
| RC-1A-7 | ¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción? | No |
| RC-1A-8 | ¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas? | No |

| RC-1B. Definición de responsabilidades sectoriales | | |
|--|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RC-1B-1 | ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-2 | ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-3 | ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-4 | ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-5 | ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-6 | ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-7 | ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-8 | ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-9 | ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |
| RC-1B-10 | ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias? | No |

| RC-1C. Definición de responsabilidades territoriales | | |
|--|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RC-1C-1 | ¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas? | No |

| | | |
|---------|---|----|
| RC-1C-2 | ¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas? | No |
|---------|---|----|

| RC-2. Evidencias de progreso en la implementación | | |
|---|--|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RC-2-1 | ¿Cuenta el Ministerio de Ambiente (o entidad rectora o coordinadora del ambiente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-2 | ¿Cuenta el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-3 | ¿Cuenta el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-4 | ¿Cuenta el Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-5 | ¿Cuenta el Ministerio de Educación (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-6 | ¿Cuenta el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-7 | ¿Cuenta el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-8 | ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector agua y saneamiento con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-9 | ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector telecomunicaciones con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |
| RC-2-10 | ¿Cuenta el ente rector o coordinador del sector energía con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años? | No |

| RC-3. Control, rendición de cuentas y participación | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| RC-3-1 | ¿Existe normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre? | Sí |
| RC-3-2 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre la gestión del gobierno en la recuperación en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional? | No |
| RC-3-3 | ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación? | Sí |
| RC-3-4 | ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la recuperación? | Sí |

PF-1A. Coordinación y articulación central de la política

| Código | Pregunta de respuesta cerrada | SI/NO |
|---------------|---|--------------|
| PF-1A-1 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres? | Sí |
| PF-1A-2 | ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional habilitados para gastos emergentes en situaciones de desastres? | Sí |
| PF-1A-3 | ¿Existe normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país? | No |
| PF-1A-4 | ¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características no homogéneas/especiales está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector? | No |
| PF-1A-5 | ¿La normatividad que regula las provisiones técnicas del sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características homogéneas/uniformes está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector? | No |
| PF-1A-6 | ¿Existe normatividad que establezca fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres? | Sí |

PF-1B. Definición de responsabilidades sectoriales

| Código | Pregunta de respuesta cerrada | SI/NO |
|---------------|---|--------------|
| PF-1B-1 | ¿Existe normatividad que establezca la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres? | Sí |
| PF-1B-2 | ¿Existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda, Finanzas o Economía, en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres? | No |
| PF-1B-3 | ¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente? | No |
| PF-1B-4 | ¿Existe normatividad sobre incentivos para el aseguramiento de la vivienda de los privados por riesgo de desastres? | No |

PF-1C. Definición de responsabilidades territoriales

| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
|---------------|---|----|
| PF-1C-1 | ¿Existe normatividad que establezca que las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente? | No |
| PF-1C-2 | ¿Existe normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en ciudades con más de 100 mil habitantes? | No |
| PF-1C-3 | ¿La ciudad capital del país cuenta con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres? | No |
| PF-1C-4 | ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo? | No |
| PF-1C-5 | ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores? | No |

PF-2. Evidencias de progreso en la implementación

| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
|---------------|--|----|
| PF-2-1 | ¿La ciudad capital del país cuenta con una estructura de protección financiera en caso de desastre? | No |
| PF-2-2 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno? | No |

| | | |
|---------|---|----|
| PF-2-3 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por <i>eventos menores y frecuentes</i> ? | No |
| PF-2-4 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres? | No |
| PF-2-5 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura crítica en caso de desastres? | No |
| PF-2-6 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado? | No |
| PF-2-7 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha generado directrices para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres? | No |
| PF-2-8 | ¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres? | Sí |
| PF-2-9 | ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo? | Sí |
| PF-2-10 | ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores? | No |
| PF-2-11 | ¿El país tiene suscrito al menos un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre? | No |
| PF-2-12 | ¿Al menos un municipio de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado? | No |
| PF-2-13 | ¿Se ha implementado al menos un mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector? | No |
| PF-2-14 | ¿El Ministerio o Secretaría de Planificación del Desarrollo Nacional, o el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, o la Entidad encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres o el sector Agricultura, cuenta con al menos un instrumento financiero diseñado <i>ex ante</i> para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres? | Sí |
| PF-2-15 | ¿El Ministerio de Agricultura tiene una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) frente al riesgo de desastres? | No |

| PF-3. Control, rendición de cuentas y participación | | |
|---|---|----|
| Código | Pregunta de respuesta cerrada | |
| PF-3-1 | ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normativa existente sobre mecanismos de protección financiera en los últimos 5 años? | No |
| PF-3-2 | ¿El ente rector del sector asegurador ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo para la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años? | No |
| PF-3-3 | ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la aplicación de los procesos de protección financiera en el país en los últimos 3 años? | No |